

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 28° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-22726-2017
CARATULADO : INVERSIONES, ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN
CASTELLANO LIMITADA/EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA,
COLCHAGUA

Santiago, veinticinco de Febrero de dos mil veinte

VISTOS:

Con fecha 23 de agosto de 2017, se presenta FELIPE A. VÁSQUEZ JIMÉNEZ, abogado, domiciliado en calle Alfredo Barros Errázuriz N°1900, Of. N°301 comuna de Providencia, ciudad de Santiago, mandatario judicial de “INVERSIONES, ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN CASTELLANO LIMITADA”, (en adelante también e indistintamente “Inversiones Castellano” o “mi representada” o simplemente “la demandante”) sociedad del giro de su denominación, domiciliada en calle Huelén, N°95, piso 2, oficina B, comuna de Providencia, Región Metropolitana, e interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de la EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A., (en adelante también e indistintamente “ELECTMETRIC”, “la Concesionaria” o simplemente “la demandada”), persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don CRISTIÁN SAPHORES MARTÍNEZ, ambos domiciliados en Avenida Presidente Riesco N°5.561, piso 14, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; a fin de que en definitiva, sea condenada al pago de las sumas que expondrá, por los graves daños ocasionados tanto a su representada, como al inmueble de su propiedad.

LOS HECHOS. A) Legitimidad activa para deducir la presente acción indemnizatoria. Al efecto sostiene que mediante escritura pública de fecha 13 de Noviembre del año 2009, otorgada en la Notaria Pública de Santiago de don Eduardo Diez Morello, inversiones Castellano adquirió por compra a la Sociedad Comercializadora y Asesorías Serrcapp Limitada, los siguientes inmuebles a saber: a. Lote Número Uno, que es parte de la propiedad ubicado en lugar denominado. El Culenar, Comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro, Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 19,17 hectáreas. Rol de avalúo 45-29 de la Comuna de Litueche. La propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada a fojas 442, N° 443, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes y Raíces de Litueche, correspondientes al año 2010. b. Lote Numero Dos, que es parte de la propiedad ubicado en lugar denominado El Culenar, Comuna de Litueche, Provincia cardenal Caro, Sexta Región. Tiene una superficie



aproximada de 26,66 hectáreas. Rol de avalúo 45-30 de la Comuna de Litueche. La propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada a fojas 443, N° 444, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes y Raíces de Litueche, correspondientes al año 2010. c. Higuera Dos de Santa Ana, que es parte de los sectores uno y siete de la ex hacienda Santa Mónica, ubicada en la comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 35,85 hectáreas. Rol de avalúo 65-120 de la Comuna de Litueche. La propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada a fojas 444, N° 445, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes y Raíces de Litueche, correspondiente al año 2010.

Las antedichas propiedades colindan entre si y forman un predio de aproximadamente 3 81,67 hectáreas.

Agrega que al momento de su compra dicho inmueble contaba con las condiciones suficientes para desarrollar en él un proyecto vinculado a la forestación y plantación forestal. En los predios se encontraban plantados más de 73 hectáreas de EUCALYPTUS 7 GLOBULUS (eucalipto), y el resto de RUBUS ULMIFOLIUS (zarzamora) e individuos de CRYPTOCARYA ALBA (peumo), PEUMUS BOLDUS (boldo) y Pastizales.

Por otra parte dice, la demandada EMELECTRIC, es dueña de la línea eléctrica denominada “Electrificación sector Cartagena El Culenar”, la que se encuentra ubicada en el sector El Culenar, de la comuna de Litueche, y está destinada al servicio público de distribución de energía eléctrica. Presenta, entre otras, las siguientes características: a. Fue construida durante el año 1999. b. De media tensión (13.200 volts). c. Longitud de 4.683 metros. d. Fue instalada con motivo del Decreto de Concesión N° 517 del 16 de Julio de 18 1996, en adelante también simplemente “El Decreto de Concesión”. e. Se encuentra emplazada en el predio Rol 45-29 y en el predio Rol 45-30, 20 correspondiente al lote N° 1 y al Lote N° 2 respectivamente, ambos de propiedad de su representada.

B) Hecho ilícito atribuible a la demandada.

En este capítulo de su acción sostiene que con fecha 29 de enero de 2012, aproximadamente a las 12.00 horas, se originó un incendio forestal en el Lote N°1 en la parte baja de un lomaje, aproximadamente a 50 metros al oriente del paso de servidumbre en las coordenadas UTM 19H 241818 6217503, con dirección de avance del fuego Noreste, subiendo por la pendiente, que afectó los predios de propiedad de su representada quemando prácticamente todas las extensiones de bosques y plantaciones existentes en ellos.



Se extendió al Lote N°2 y la Higuera Dos de Santa Ana, y posteriormente se extendió a diversos predios, entre ellos los de propiedad del señor Antonio Molino Chiorini y de don Andrés Bomcompte Adreau, afectando una superficie aproximada de 140 hectáreas de especies arbóreas tales como pino, eucalipto y vegetación típica de la zona.

Indica que de acuerdo al Informe Técnico de Incendio Forestal, del departamento del Manejo del Fuego de la Corporación Nacional Forestal (en adelante también simplemente CONAF), el incendio forestal en comento se produjo 8 kilómetros al oeste de Litueche y afectó una superficie total de 140 hectáreas; la superficie afectada se desglosa de la forma que sigue

VEGETACIÓN	SUPERFICIE (Hectáreas)
PINO	30,00
EUCALIPTO	40,00
OTRAS PLANTACIONES	0,00
ARBOLADO	0,00
MATORRAL	35,00
PASTIZAL	35,00
DESECHO	0,00
AGRÍCOLA	0,00
TOTAL AFECTADO	140,00

C) Evidencia y responsabilidad de la demandada. Sobre el particular expresa que el incendio dio lugar al inicio de la correspondiente Investigación Criminal por Incendio de Bosques, dando origen a la Causa RUC Número 12001155449-2. De los antecedentes reunidos en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público se puede establecer la efectividad de haberse originado el incendio en el Lote número 2 y la Higuera 2 de Santa Ana, y de allí a otros inmuebles, sino que también, las causas del mismo.

En efecto y a la luz de tales antecedentes, el incendio se originó en el Lote número 1, en el área o zona denominada “franja de seguridad” de un tendido eléctrico de media tensión perteneciente a la EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A. (tendido eléctrico al que se hizo referencia.

Con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, en el lugar de los hechos, el tendido eléctrico se encontraba unido por dos postes, el poste número 52, ubicado aproximadamente en las coordenadas UTM 19H 241891 (norte) y 6217900 (este) y el poste número 50, numeración 5/0283361 de tendido eléctrico, ubicado aproximadamente en las coordenadas UTM 19H 242276 (norte) y 6217657 (este), existiendo una distancia entre uno y otro de 452 metros.



El incendio se originó por un corte o desprendimiento de un cable de la instalación eléctrica, producido en un punto intermedio de la distancia existente entre los postes número 52 y 50, el cual, al estar energizado y tomar contacto con la vegetación y hierbas secas existentes en el suelo, dio lugar al foco del incendio descrito precedentemente, extendiéndose dramáticamente en la forma ya relatada, quemando y dañando más de 140 hectáreas de plantaciones forestales, arbustos y pastizales. En este mismo sentido, señala, que el Informe Técnico de Incendio Forestal, del Departamento de Manejo del Fuego de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a enunciar las causa del siniestro señaló textualmente que, “Según lo estimado por personal de CONAF, la causa estaría calificada por el código 01.09.03 que dice relación con corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación”.

III. FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE ACCIÓN. A) La presente acción no se encuentra prescrita.

En éste párrafo de su acción expresa que es evidente que, lo primero que intentará la contraria es alegar prescripción de la acción atendido la data del hecho. Lo cierto es que con fecha 29 de enero del año 2012 se originó el incendio pero sólo puede dirigirse la acción en contra de su responsable cuando se toma conocimiento de ello. De tal antecedente, solo se toma conocimiento con fecha 08 de mayo de 2012.

De otro lado, hace presente que con fecha 10 de julio 2013, interpuso, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, acción de indemnización de perjuicios. La demanda, Emelectric, opuso excepción de incompetencia con fecha 04 de 10 noviembre del mismo, la cual fue fallada, declarándose la incompetencia del Tribunal, con fecha 12 de enero del año 2015.

Razón de lo anterior y habiéndose deducido oportunamente las acciones en cuestión, la prescripción se interrumpió durante dicho período, mérito por el cual a su juicio está dentro de plazo para formular esta demanda.

B) Obligaciones incumplidas por la demandada. Al efecto sostiene que es sabido que la demandada, en su calidad de tal, tiene dos obligaciones o deberes fundamentales cuyo incumplimiento trae aparejado, responsabilidad, cuales son, el deber de mantención y el deber de revisión periódica de las instalaciones eléctricas, por cuanto ellas solas por su sola existencia constituyen un elemento de riesgo que exige adoptar todas las medidas conducentes a su plena estabilidad y seguridad, todo ello con el objeto de evitar daños a las personas y cosas.



Destaca, que los antecedentes e informes técnicos evacuados en el marco de la referida investigación criminal, demuestran que el desprendimiento del cable energizado de las instalaciones eléctricas ocurrió debido a la fatiga de material del tendido eléctrico de la demandada, y tal lamentable suceso se debió a la más absoluta falta de mantención de la franja de seguridad y de la línea eléctrica misma pues, precisamente, no dio cumplimiento a las obligaciones ya referidas.

C) Los informes y evidencia obtenida, atribuye la responsabilidad a la demandada.

En este punto explica que la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile en el Informe Policial N°338/00851, del 08 de Mayo de 2012, señala que, “Si bien la empresa ELECMETRIC, luego de ocurrido el incendio limpió la faja que va por debajo de tendido eléctrico, se puede observar que en las zonas no afectadas, hay árboles de grandes dimensiones, las cuales miden 15 metros de altura, sobrepasando dicho tendido. Se adjunta Anexo Fotográfico. Ver Anexo 081”. Continúa señalando “... el incendio se originó por un corte en el tendido eléctrico, lo cual puede haberse ocasionado producto de una fatiga de materiales o bien a la falta de mantención en la faja que se encuentra bajo el tendido eléctrico, ya que la gran altura de los árboles existentes, mas el viento existente en la zona pueden ocasionar un corte”. Finalmente, el informe es lapidario en afirmar “que se puede establecer que la responsabilidad del incendio ocurrido, corresponde a la empresa eléctrica Emelectric S.A, por su actuar negligente en la fiscalización y mantención del tendido eléctrico en la zona, por cuanto no se realizaron las podas o limpieza de las fajas, donde se encuentra establecido el trazado del tendido eléctrico”.

Por su parte, el Informe Pericial Medioambiental (O) N°110 de fecha 4 de Junio de 2012, emanado por las Sección de Ecología y Medioambiente de la Policía de Investigaciones de Chile, el que al referirse a la causa del incendio forestal dispuso que “El valor obtenido por la humedad del Combustible Ligero Muerto (H.C.L.M) para el día y hora en que ocurrió el incendio, indica que es probable la ignición del material vegetal combustible y su posterior propagación dadas las condiciones meteorológicas reinantes. Además, considerando la presencia de un tendido eléctrico, e indicios de la reparación del mismo, así como desmalezado bajo esta red eléctrica, junto con el valor de la H.C.L.M, permiten clasificar este incendio en la categoría de accidental, o sea, aquellos provocados por accidente, negligencia o descuido. En este caso en particular se encuentra



referido a un acto negligente al no mantener libre de arbolado o malezas la faja en donde se encuentra el tendido eléctrico.” Conluye, el informe N°110, indicando: “Los vestigios de alteración de la línea bifásica de media tensión en las inmediaciones del punto N°1, además de cortas recientes en arbolado presente bajo dicho tendido., pueden ser indicadores de un incendio cuya causa se encuentra clasificada dentro del grupo Accidentes, específicamente accidente eléctrico, por un acto negligente y/o descuido al no mantener despejado de arbolado y malezas la faja baja del tendido eléctrico de media tensión”

D) Las declaraciones de testigos contenidas en la carpeta de investigación, atribuye responsabilidad a la demandada. Refiere en este punto que en cuanto a las revisiones o mantenciones periódicas de las instalaciones eléctricas, el testigo Javier Antonio Flores Palma (en cuya propiedad también pasa el tendido eléctrico), al consultarle respecto a si la demandada hacía mantenciones periódicas en el sector, señaló categóricamente que no las practicaba, “pudiéndose observar que la altura de los árboles ubicados al interior de su propiedad sobrepasan la altura del tendido eléctrico”(Informe Policial N°338/00851, de 08 de Mayo de 2012, página 7).

E) Se satisfacen en la especie los presupuesto de la denominada “culpa contra legem”. Dice que tratándose de ámbitos situacionales regidos por el derecho, para su ilicitud basta la infracción de una norma jurídica para que haya culpa: es la denominada culpa contra ley, misma que ha incurrido en este caso.

El hecho ilícito de la demandada consistió en construir un tendido eléctrico para luego no cumplir con sus obligaciones de revisión y mantención sobre el mismo, lo que tuvo como consecuencia el corte o despredimiento de un cable de la instalación eléctrica (en un punto intermedio de la distancia existente entre los postes número 52 y 50), el cual, al estar energizado y tomar contacto con la vegetación y hierbas secas existentes en el suelo, dio lugar al foco del incendio.

El fundamento jurídico de lo señalado se desprende de lo dispuesto por los art. 2.284, 2314 y 2329 del CC, en tanto se está en presencia de un hecho ilícito cuando se crea un riesgo no permitido que ha causado daño y ese riesgo creado no está cubierto por una causal de justificación, es decir, no tenía por objeto proteger intereses superiores.

F) La génesis del deber de la demandada de evitar el resultado lesivo, proveniente de un contenido normativo infringido.

Cita en primer término el Decreto Concesionario N°517 de 16 de Julio de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Construcción para establecer,



operar y explotar esa instalación de servicio público de distribución de energía eléctrica que en artículo 8 dispone: “La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto en el D.F.L N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, y queda sometida a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia”.

Por su parte, la Ley General de Servicios Eléctricos (D.F.L N° 1 de 1982 de Minería, refundido y sistematizado por el Decreto Fuerza de Ley N° 4 del año 2006) en adelante “LGSE”, en su artículo 139 dispone: “Es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar el peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes”

Esta mantención, es decir, el deber de la demandada de prevenir los riesgos, la vincula la ley con el principio general del servicio eléctrico: la calidad del servicio, en su acepción de seguridad. En efecto, el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante simplemente “RLGSE”, contempla las siguientes normas relativas a la materia:

Artículo 205, conforme al cual: “Es deber de todo operador de instalaciones eléctricas en servicio, sean de generación, transporte o distribución, y de todo aquel que utilice instalaciones interiores, mantenerlas en buen estado de conservación y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas”

Artículo 214: “Los operadores de instalaciones eléctricas deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, que produzcan riesgo a la seguridad de las personas o daño en las cosas, que obstruyan las vías públicas o dificulten el tránsito normal de las personas y vehículos.”

Artículo 222, inciso 2º: “la calidad de servicio incluye, entre otros, los siguientes parámetros: [...] f) La oportuna atención y corrección de situaciones de emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y otros imprevistos” .

Artículo 214: “Los operadores de instalaciones eléctricas deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, que produzcan riesgo a la seguridad de las personas o daño en las cosas, que obstruyan las vías públicas o que dificulten el tránsito normal de las personas y vehículos”.

G) La ley impuso a la demanda una posición de garante. En esta capítulo de su acción señala que las citadas normas establecen una verdadera posición de



garante para EMELECTRIC, que la obliga a tomar todas las precauciones para evitar daños a las personas y cosas, por cuanto la existencia de las instalaciones eléctricas constituyen por sí solas un elemento de riesgo, que exige adoptar las medidas conducentes a su plena estabilidad y seguridad.

En consecuencia, cuando no adopta dichas medidas, y de tal omisión se deriva un resultado lesivo, está actuando contra ley, configurándose así un hecho culposo. Estas normas, además, demuestran que el grado de cuidado que se le exige a la demandada es de muy alto estándar, con lo cual la extensión de la posición de garante se incrementa, se expande, presumiéndose culpa cuando, como en la especie, se ha producido un incumplimiento de dicho deber, al no suprimirse la peligrosidad de las instalaciones por medio de su mantención y revisión periódica, tal como lo ordenan las referidas normas. Lo anterior se deriva de que al estar en un caso de culpa contra ley, la negligencia se presume.

En este caso concreto, indica, EMELECTRIC incumplió sus deberes de cuidado, de mantención y conservación, normativamente establecidos, en las normas jurídicas ya invocadas.

H) La causa inmediata y directa de todos los perjuicios sufridos está constituida en términos generales por el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la demandada. Manifiesta sobre el particular que nadie podrá poner razonablemente en duda, que entre la caída del cable de alta tensión, producto de la infracción a la obligación de mantención y cuidado y el resultado dañoso, experimentado por la demandante (perjuicios), existe una clara relación de causa a efecto. El daño es en este caso, sin duda, una consecuencia o efecto de la culpa, de tal manera que este es el fundamento u origen de aquel. Si no se hubiera omitido la conducta exigida: Entre otras, la revisión y mantención permanente de las líneas eléctricas, el cable jamás hubiera originado el fuego y, en consecuencia, no se habrían producidos los perjuicios. Luego, existe una perfecta cadena lógica entre la conducta omisiva de la demandada y el resultado lesivo o dañoso, en relación causa a efecto.

I) La demandada tiene la obligación de reparar el daño causado. En este punto dice que en cuanto a los daños, éstos deberán repararse íntegramente, atendidos los términos del artículo 2329 del Código Civil. Los hechos causaron daños y perjuicios a su representada, toda vez que vio destruidas en gran parte las plantaciones existentes en su predio actual, como dijo, cubre una superficie de 81,67 hectáreas aproximadas. Dichas 81,67 hectáreas contenían plantaciones forestales de eucaliptos globulus (73 hectáreas aproximadamente de las 81,67



hectáreas totales) que al momento de producirse el incendio tenían una edad de 7 y 9 años, además del resto de la vegetación ya mencionada.

Tal como ha quedado establecido en la investigación, el incendio causó cuantiosos daños en las propiedades por las cuales el fuego se extendió, entre las cuales se encuentra el predio de propiedad de su representada, en la cual se quemó parte de la plantación de EUCALIPTUS GLOBULUS, con valores de más de cinco millones de pesos la hectárea, solo de plantación.

Sin perjuicio del valor del terreno, más la pérdida completa de pastizales que alcanzaban a cubrir aproximadamente 5 hectáreas, la íntegra y completa destrucción de las demás especies existentes, la pérdida o degradación de más de 10 hectáreas de praderas naturales, y la destrucción de cercos de deslindes con su consecuente reparación.

En lo que dice relación con los daños demandados por concepto de daño emergente y lucro cesante, se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, esto es: son ciertos; afectaron directamente al demandante; fueron causados por la demandada; y hasta la fecha no ha existido ni se ha ofrecido ningún tipo de reparación.

Respecto de la pérdida de más de 22 hectáreas de EUCALIPUS GLOBULUS (eucalipto), el daño emergente está dado por el valor económico que tenían dichos bosques a la fecha del siniestro, pues en esa fecha (8 años promedio) ya eran susceptible de aprovechamiento comercial. Igualmente se ha producido un lucro cesante, correspondiente a la diferencia del valor que debió percibirse por las especies siniestradas, si se hubiera efectuado la cosecha al término del periodo de rotación programado (13 años promedio).

El valor comercial de las plantaciones de eucaliptos, a la fecha del siniestro, alcanzaba los \$115.000.000.-, correspondiente al daño emergente que por concepto de la quema de estas plantaciones ha sufrido su representada; y el lucro cesante alcanzó a \$20.000.000.-

A mayor abundamiento, la propiedad de su representada, con motivo del incendio, perdió la totalidad de los cercos construidos e instalados, los cuales fueron nuevamente construidos, asimismo se vieron afectadas numerosas hectáreas de pastizales y demás especies nativas. Por este concepto ha sufrido un daño emergente que alcanza a \$15.000.000.-

IV. CONCLUSIONES. En este punto de su acción sostiene que conforme ha desarrollado, demanda que sea condenada la empresa EMELECTRIC a resarcir los perjuicios ocasionados por cuanto la infracción de sus deberes de



cuidado y mantención, ocasionaron un incendio en la propiedad de su representado que, en definitiva, ha ocasionado, por concepto de daño Emergente la suma de \$130.000.000.- (ciento treinta millones de pesos), y por concepto de Lucro Cesante la suma de \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), pues el total de los daños sufridos por Inversiones Castellano ascienden a la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos).

Dichas sumas deberán pagarse con los reajustes y/o intereses que correspondan, más las costas de la causa.

Solicita, de acuerdo a las disposiciones legales que cita, que se condene a la demandada a pagar a su representada por concepto de indemnización de perjuicios la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), que se desglosan de la forma ya indicada, más los intereses y reajustes que correspondan; o bien, la suma que se determine de conformidad a derecho y al mérito del proceso, con expresa condenación en costas.

Con fecha 24/5/2018, la demandante presenta escrito cumple lo ordenado, en que señala: A) Para acreditar la representación legal del que comparece a nombre de la demandante, en este acto acompaña Mandato Judicial, suscrito por don Juan Carlos Mella Astudillo, representante legal de la Sociedad Inversiones, Asesorías y Capacitación Castellano Limitada, para actuar en nombre y representación de la Sociedad, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

B) Por cuanto a la excepción dilatoria de ineptitud de libelo, en lo que refiere a la aclaración del lugar donde se inicia el incendio, precisa y corrige la demanda en la parte que se indica: “El incendio que dio lugar al inicio de la correspondiente Investigación Criminal por Incendio de Bosques, dando origen a la causa RUC Número12001155449-2. De los antecedentes reunidos en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público se puede establecer la efectividad de haberse originado el incendio en el Lote número 2 y la Hijuela 2 de Santa Ana, y de allí a otros inmuebles, sino que a también, las causas del mismo.” Debiendo decir: “El incendio que dio lugar al inicio de la correspondiente Investigación Criminal por Incendio de Bosques, dando origen a la causa RUC Número12001155449-9 2. De los antecedentes reunidos en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público se puede establecer la efectividad de haberse originado el incendio en el Lote número 1 y la Hijuela 2 de Santa Ana, y de allí a otros inmuebles, sino que a también, las causas del mismo.”

Efectivamente sostiene que el incendio se origino en el Lote numero 1.



Con fecha 15 de Junio de 2018 doña STEFANIE RAMDOHR MONTGOMERY, abogado, en representación de CGE DISTRIBUCIÓN S.A (en adelante indistintamente “CGED”), en su calidad de continuador legal de EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A (en adelante indistintamente “EMELECTRIC”), contesta la demanda de autos, solicitando el rechazo de ellas en todas sus partes, todo ello con costas.

ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

1. Señala que INVERSIONES, ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN CASTELLANO LIMITADA, representada por el abogado FELIPE VÁSQUEZ JIMÉNEZ, interpone en estos autos una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de EMELECTRIC (hoy CGE), por la supuesta responsabilidad que le cabría a su representada en el incendio que habría acaecido el 29 de enero de 2012 en el sector “El Culenar” en la comuna de Litueche.
2. A juicio del demandante, el presunto incendio se habría originado “por un corte o desprendimiento de un cable de la instalación eléctrica, producido en un punto intermedio de la distancia existente entre los postes número 52 y 50, el cual, al estar energizado y tomar contacto con la vegetación y hierbas secas existentes en el suelo, dio lugar al foco del incendio (...).”
3. En relación a los supuestos daños sufridos, sostiene que por el incendio de supuesta responsabilidad de mi representada habrían resultado afectadas 81,67 hectáreas de propiedad del demandante, razón en virtud de la cual demanda una indemnización ascendente a \$150.000.000.-
4. Fundamenta el demandante su acción resarcitoria en lo dispuesto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y, finalmente, en el las “demás [normas] pertinentes.”

ALEGACIONES DE LA DEFENSA

En este punto hace presente en relación a los hechos que se señalan en la demanda, que en esta etapa procesal y para los efectos de la prueba que deberá ofrecerse y rendirse controvierte la totalidad de los hechos alegados por los demandantes y que en caso de comprobarse la existencia del presunto incendio, este no tuvo como punto de origen el señalado por el demandante, y que el mismo no tiene como causa ningún accidente eléctrico ocurrido como consecuencia de ninguna conducta u omisión culpable en que haya incurrido EMELECTRIC.

La defensa la estructurará de la siguiente manera: I. ANTECEDENTES DE HECHO. II. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. III. EXCEPCIÓN PERENTORIA



DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE Y EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE EMELECTRIC S.A. IV. ALEGACIONES DE FONDO – FALTA DE LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL V. INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS QUE SE RECLAMAN, NATURALEZA Y MONTOS. VI. EN CUANTO A LOS REAJUSTES E INTERESES – COSTAS

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEXTA REGIÓN EN ENERO DE 2012. En este punto de su defensa sostiene que en atención a las alegaciones de responsabilidad formuladas por los demandantes –que controvierte en su totalidad-, es fundamental que se considere previamente las características del lugar y la época en la que ocurrieron los hechos, en particular debido al supuesto nexo de causalidad que se alega en la especie.

Señala que a sexta región desde hace años se encuentra sufriendo una sequía histórica, producida por la falta de lluvias y elevadas temperaturas, factores que pudieron haber resultado determinantes en el inicio y propagación del incendio materia de autos. A mayor abundamiento, tan solo 3 días antes de que desatara el incendio, el Ministerio de Agricultura decretó “Emergencia Agrícola” en 22 comunas de la VI Región de O’Higgins, incluyendo la comuna de Litueche.

Las formulaciones hechas, apuntan a graficar de modo claro la compleja situación que se vivía en la zona. Además, debemos tener en consideración que el incendio tuvo lugar entre los meses de enero y febrero, fecha en que la zona es visitada por turistas, que acampan en diversos lugares, hecho que incrementa el riesgo de incendio.

Insiste, entonces, que en este proceso la problemática de la causa o nexo causal de los supuestos daños sufridos por el demandante debe quedar fehacientemente asentada. Se descarta, a su parecer, toda posible elaboración de presunciones o informes que no sean absolutamente certeros y científicos.

2. SOBRE EL FOCO DEL INCENDIO. A este respecto, dice que el demandante ha citado, fragmentadamente, presuntos documentos – que desconoce- todos los cuales, en su errado concepto, permitirían concluir que EMELECTRIC sería responsable del presunto incendio materia de autos. Controvertimos en términos expresos todo lo anterior. En efecto, en primer lugar, el demandante cita el presunto informe N°338/00851, el cual señalaría: □ “Si bien la empresa ELECMETRIC, luego de ocurrido el incendio limpió la faja que va por debajo del tendido eléctrico, se puede observar que en las zonas no afectadas, hay árboles de grandes dimensiones, los cuales miden 15 metros de altura, sobrepasando



dicho tendido. Se adjunta anexo fotográfico” □ “(...) el incendio se originó por un corte en el tendido eléctrico, lo cual puede haberse ocasionado producto de una fatiga de materiales o bien a la falta de mantención en la faja que se encuentra bajo el tendido eléctrico, ya que la gran altura de los árboles existentes más el viento existente en la zona pueden ocasionar un corte.” □ “Que se puede establecer que la responsabilidad del incendio ocurrido, corresponde a la empresa eléctrica Emelectric S.A, por su actuar negligente en la fiscalización y mantención del tendido eléctrico en la zona, por cuanto no se realizaron las podas o limpieza de las fojas donde se encuentra establecido el trazado del tendido eléctrico.”

Luego, el demandante cita el presunto Informe Pericial Medioambiental O N°110, en los cuales se señalaría: □ “El valor obtenido por la humedad del Combustible Ligerito Muerto (HCLM) para el día y hora en que ocurrió el incendio, indica que es probable la ignición del material vegetal combustible y su posterior propagación dadas las condiciones meteorológicas reinantes. Además, considerando la presencia de un tendido eléctrico, e indicios de la reparación del mismo, así como desmalezado bajo esta red eléctrica, junto con el valor de la H.C.L.M, permiten clasificar este incendio en la categoría de accidental, o sea, aquellos provocados por accidente, negligencia o descuido. En este caso en particular se encuentra referido a un acto negligente al no mantener libre de arbolado o malezas la faja en donde se encuentra el tendido eléctrico.”

“Los vestigios de alteración de la línea bifásica de media tensión en las inmediaciones del punto N°1, además de cortas recientes en arbolado presente bajo dicho tendido, pueden ser indicadores de un incendio cuya causa se encuentra clasificada dentro del grupo Accidentes, específicamente eléctrico, por un acto negligente y/o descuido al no mantener despejado de arbolado y malezas la faja baja del tendido eléctrico de media tensión.”

De la simple lectura de los extractos de los presuntos informes, sostiene que ninguno es claro en señalar una relación causa efecto entre los deberes de seguridad presuntamente incumplidos por su representada y el incendio que se habría originado como consecuencia necesaria y directa de los mismos. A mayor abundamiento, dichos informes son abiertamente contradictorios o manifiestamente infundados: i. Respecto del Informe Policial N°338/00851, señala que llama poderosamente la atención que en un primer momento hable en términos potenciales, utilizando incluso el vocablo “puede”, para luego concluir, de manera absolutamente infundada, que el incendio se debería al actuar “negligente” de EMELECTRIC.



El referido informe no descarta otras causas, ya sea del incendio, o del corte de cables. En este último caso, destaca que el tendido eléctrico pudo verse afectado una vez que fuese alcanzado por las llamas, una vez desatado el incendio. ii. Respecto al Informe Pericial Medioambiental O-N°110, nuevamente nos encontramos con un documento que se encuentra redactado en términos dubitativos, señalando que: “es probable la ignición del material vegetal combustible y su posterior propagación dadas las condiciones meteorológicas reinantes”.

No logra entender como de una premisa que es “probable”, se logra llegar a una conclusión tan categórica, como la de este caso, esto es, que el incendio sería responsabilidad de EMELECTRIC. Pareciera ser que da la sola existencia de líneas eléctricas y de vegetación, se seguiría ineludiblemente que el incendio tendría un origen eléctrico, sin dan un mayor raciocinio de los elementos existentes en el sector, y de como ellos, no permitirían generar el incendio, razón por la cual el mismo sería consecuencia directa y necesaria del actuar de EMELECTRIC.

A su parecer, queda de manifiesto, entonces, que el actor no se hace cargo de una serie de hipótesis que pudieron se causa del incendio, entre las cuales podemos destacar: - Incidencia de materiales incandescentes o altas temperaturas. - Ignición de vegetación debido a amplificación de la luz solar en vidrios, botellas u otros elementos. - Cigarrillos o fósforos mal apagados.

Se pregunta, ¿Acaso no resulta mucho más probable que la causa del corte del tendido eléctrico haya sido el calor generado por un incendio iniciado previamente? En este sentido señala que no hay un testigo presencial del origen del incendio, por lo que un corte del tendido eléctrico perfectamente pudo ser causado como consecuencia del calor emanado de un incendio por otras causas descartadas a priori por los actores.

3. RESPECTO DE EMELECTRIC. Su representada no ha infringido deber de cuidado una obligación de carácter reglamentario o legal alguno. A mayor abundamiento, su representada cumplió con las obligaciones de mantención que impone el ordenamiento jurídico en materia de servicios eléctricos.

En definitiva, controvierte que el demandante haya sufrido algún perjuicio con ocasión del incendio de enero de 2012; asimismo, controvierte que el demandante sea dueño de la propiedad que indican, que exista un vínculo causal entre alguna acción u omisión imputable a su representada y algún daño o perjuicios que hipotéticamente hubieran sufrido.



II. EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Al respecto señala que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2332, 2492 y a los artículos 2514 y siguientes, todos del Código Civil, opone la excepción perentoria de prescripción extintiva, como modo de extinguir la acción judicial materia de autos.

En primer lugar, señala que el actor en su libelo sustenta su acción en base del régimen de responsabilidad extracontractual, contenido en el título XXXV del Libro IV del Código Civil. Lo anterior se desprende de manera expresa de diversos pasajes de la demanda, sin embargo, para efectos ilustrativos indica lo dispuesto en la parte petitoria de la demanda:

“POR TANTO: En mérito de lo expuesto y dispuesto en los artículos 2314, 2329 del Código Civil y demás normas legales citadas, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás pertinentes (...)”.

Tomando en consideración que los demandantes han invocado un régimen de responsabilidad estrictamente civil, debe atenderse exclusivamente a las disposiciones que contiene el Código Civil sobre la materia. En este sentido, el artículo 2492 señala: “Art. 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción.”

Como se desprende del artículo recientemente citado, nuestra legislación conceptualiza en un mismo artículo la prescripción adquisitiva y la extintiva, siendo la doctrina, quien en base a lo dispuesto por en el artículo 2492, ha dado una definición circunscrita únicamente a la prescripción extintiva, entendiéndola como: “Un modo de extinguir los derechos y acciones ajenos, por no haberlos ejercitado el acreedor o titular de ellos durante cierto lapso de tiempo, concurriendo los demás requisitos legales.”.

Dicho lo anterior, señala que el propio Código Civil contempla diversos requisitos para que pueda operar la prescripción. En primer lugar, se consagran reglas comunes a toda prescripción, y luego los requisitos específicos para dar lugar a la prescripción extintiva. A continuación, se expondrán someramente cada uno de ellos.

Los requisitos para que opere esta prescripción, se han entendido como:



- Las reglas comunes a toda prescripción, entendiéndose por estas a) Que toda prescripción debe ser alegada; b) que toda prescripción puede ser renunciada, una vez cumplida y c) que corre por igual en contra de toda clase de personas;

- Requisitos propios de la prescripción extintiva: a) Acción prescriptible; b) Inactividad de partes; y c) Tiempo de prescripción.

A mayor abundamiento, nuestro Máximo Tribunal ha señalado lo siguiente en un reciente fallo: “Que resulta conveniente consignar que la prescripción es una institución de orden público cuyo fundamento se vincula con consideraciones de utilidad y seguridad jurídicas, entre ellas, la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas y consistencia de los derechos, en la medida que concurren los requisitos que al efecto ha establecido el legislador: prescriptibilidad de la acción, transcurso del tiempo e inactividad de las partes”.

Respecto a quién puede alegar la prescripción, la regla es que, por ser una excepción real, puede ser alegada por todos los obligados al pago de una obligación, tal como ocurriría en este caso respecto de su representada.

No hay duda de que en autos nos enfrentamos a una situación que cumple con todos y cada uno de los requisitos para dar lugar a la prescripción, y es que, primeramente, estamos frente a una acción prescriptible - conforme a la regla general de que toda acción lo es – y es que la acción que persigue una indemnización de perjuicios en ningún caso ha sido planteada como una excepción a la regla.

En segundo lugar, ha habido una evidente inactividad de la parte demandante, viniendo la prescripción extintiva a ser una especie de sanción para el acreedor indolente que deja pasar períodos prolongados, sin hacer efectivos sus créditos.

Ahora bien, respecto a la interrupción de la prescripción, hay consenso tanto en la doctrina como en nuestra jurisprudencia, de que se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Debe presentarse una demanda judicial, conforme al artículo 2518 inciso 3º que señala “se interrumpe civilmente por la demanda judicial”.

- Notificación de la demanda. Para que opere la interrupción, es claro que no basta la presentación de la demanda, sino que es necesario que esta se encuentre legalmente notificada, debiendo notificarse la misma antes del vencimiento del plazo de prescripción.



- Que no se haya producido alguna de las situaciones contempladas en el artículo 2503, correspondientes al abandono del procedimiento, desistimiento de la demanda o sentencia absolutoria.

Por último, respecto al tiempo de prescripción, el artículo 2332 del Código Civil establece que las acciones que se conceden bajo el estatuto de responsabilidad extracontractual, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.

Pues bien, dice, teniendo presente lo anterior, resulta que la acción dirigida en contra de su representada se encuentra ineludible e irremediamente prescrita, como expondrá a continuación:

Los demandantes respecto de los cuales se opone esta excepción, accionan buscando la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, por un incendio ocurrido el día 29 de enero de 2012.

- Pues bien, según el estampado receptorial extendido por el ministro de fe, don Luis Claudio Vega Navarro, la demanda de autos fue notificada a su representada el día 4 de diciembre de 2017, esto es a 5 años, 10 meses y 5 días de los hechos en los cuales se funda la presente acción, período que excede con creces el plazo de 4 años exigido por el artículo 2332 del Código Civil.

- Respecto de los demandantes de autos, no concurre ninguna circunstancia que pueda haber interrumpido la prescripción que esta parte alega.

En efecto, pese a lo señalado por los demandantes, lo cierto es que la presentación y notificación de la demanda ante tribunal incompetente en caso alguno pudo haber interrumpido el plazo de prescripción, en tanto, como es bien sabido, la doctrina y la jurisprudencia se encuentran contestes en que lo obrado ante un tribunal incompetente es nulo, por aplicación de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República. En este mismo sentido se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema: “13°. Que contrariamente a lo sostenido por el arbitrio de nulidad sustancial, los jueces del mérito efectuaron una correcta aplicación de las normas atinentes al caso. En este entendido, además de lo dicho a propósito de la casación de forma, y tal como lo sostiene el fallo recurrido, la declaración de incompetencia impide cuando ese defecto ha sido oportunamente denunciado considerar como válido lo obrado ante aquel que no aparecía llamado por ley a resolver el asunto, puesto que el acogimiento de esa excepción de incompetencia alegada en este caso como declinatoria no resulta subsanable, sino que por el contrario, en el ámbito civil concluye el proceso, justamente por incompetencia del tribunal. Ante tal escenario, y sin que exista



norma expresa en esta materia como si ocurre en otras ramas del derecho, no puede pretenderse conferir viabilidad a una demanda presentada ante un tribunal diverso al que correspondía. De ahí que el archivo de los antecedentes resulta el único medio para concluir ese proceso indebidamente enderezado, en espera que el accionante se conduzca conforme a la declaración de incompetencia y radique su pretensión, ahora sin defecto, ante el tribunal que corresponda”.

En definitiva expresa, concurren todos los requisitos para dar lugar a la prescripción de su acción indemnizatoria, esto es: (i) la acción prescriptible; (ii) inactividad de partes; y(iii) transcurso del tiempo (4 años), razón por la cual la demanda de autos no puede prosperar.

III. EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE Y EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE EMELECTRIC S.A. 1. Cuestión preliminar sobre la legitimación para litigar.

En este capítulo de su contestación explica que previo a los argumentos en los que se sustenta la excepción interpuesta, considera de suma relevancia, referirse entonces a la acción. Respecto de quién o quiénes son titulares de la misma y en contra de quién o quiénes puede ser ejercida, de manera tal, que dicho acto que da inicio al proceso sea conducente al fin del mismo: la dictación de una sentencia que resuelva el conflicto. Nuestra doctrina ha señalado que desde el momento en que se produce la violación de un derecho, su titular recurre a la protección del Estado, quien se la proporciona mediante aquellos en quienes reside la función jurisdiccional. La manera de provocar esta protección es deduciendo una demanda, que es el modo normal de ejercitar la acción, y se manifiesta posteriormente en un acto del tribunal que recibe el nombre de sentencia.

Nuestro Código de Procedimiento Civil no contiene ninguna definición de lo que se debe entender por acción, ya que sus redactores tuvieron presente el concepto de acción como un elemento del derecho sustantivo, es decir, participaron de la teoría clásica de la acción. Así y siguiendo la posición doctrinaria clásica, deben concurrir al ejercicio de la acción una serie de elementos, a saber: a) Existencia de un derecho, ya que la acción no es más que el derecho subjetivo puesto en ejercicio. b) Existencia de un interés, es indispensable que el actor tenga interés porque el derecho no es sino el interés protegido por la ley, y si falta el interés, la protección que es la acción es innecesaria y desaparece. c) Existencia de una calidad, es decir que el actor debe estar legitimado para deducir



la acción, y lo está aquel al cual la ley le reconoce la posibilidad de accionar. d) Existencia de una capacidad, el actor o demandante para deducir válidamente su demanda, es decir, para entablar su acción debe tener capacidad procesal equivalente a la capacidad de ejercicio del Código Civil.

Siguiendo a CASARINO, son tres los elementos de la acción: (i) Los sujetos de la acción, (ii) El objeto de la acción y, (iii) La causa de la acción. En cuanto al primer elemento, este procesalista, nos señala que los sujetos de la acción, a su vez, se clasifican en: activo y pasivo. Al hablar que la acción debe ejercitarse con las formalidades que señala la ley nos estamos refiriendo a que ese ejercicio debe realizarse a través de un vehículo, de una prestación que se hace al tribunal y esa es la demanda.

En general podemos decir que la demanda es el medio hábil para ejercitar la acción siendo ésta la forma de hacer valer el derecho que se reclama.

Vistos los conceptos de acción y pretensión, señala que nuestra jurisprudencia y doctrina sostienen en forma unánime, que uno de los requisitos para obtener la tutela jurisdiccional, la protección de los derechos por medio de los tribunales de justicia, es que la demanda se entable por el sujeto al cual corresponda la acción y se dirija en contra del sujeto pasivo de la misma. Este requisito se denomina legitimación en la causa, y puede ser activa –en el caso del demandante– o pasiva –en el caso del demandado–. Nuestro ordenamiento jurídico determina a quien corresponde la acción. En el caso de la responsabilidad extracontractual corresponde a aquellos que al tenor de lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil hayan sufrido el daño.

2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE.

Refiere sobre el particular que en el sentido indicado en el acápite anterior, debe señalar que en el caso de autos nos encontramos ante un solo demandante quien presenta el libelo indemnizatorio en contra de su representada. Para intentar esta acción y por lo tanto, tener legitimación activa para demandar, es requisito indispensable que quien demanda tenga alguna de las calidades establecidas en el artículo 2315 del Código Civil.

El demandante que señala que demanda la indemnización de perjuicios en su calidad de dueño de las propiedades que indica, en razón de haber sufrido un supuesto daño, por lo que deberá acreditar en este juicio lo siguiente: - Su calidad de propietario. - Su calidad de único propietario. - No haber otorgado el usufructo de las propiedades a terceros. - Haber sufrido un daño. Recuerda que el daño es el centro de la responsabilidad, sin daño no hay responsabilidad, por lo que su



correlativa acción no existe. La falta de daño demuestra la falta de condición de la acción y su consiguiente falta de legitimación.

Mediante la oposición de esta excepción, controvierte todos los presupuestos enunciados anteriormente, y que darían a los demandantes legitimación activa para accionar en estos autos, debiendo ser probados por el demandante. En consecuencia, corresponde pronunciarse respecto de la falta de legitimación activa de los demandantes, según se solicitará en el petitorio de esta presentación.

3. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE EMELECTRIC.

En este apartado manifiesta que la parte demandante ha errado al intentar su demanda en contra de su representada en atención a que, no ha tenido participación alguna en los hechos en que se funda la acción resarcitoria de autos y no existe relación causal entre algún daño que se reclama y alguna acción u omisión atribuible a su representada, mal podría EMELECTRIC ser el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

Su representada no ha infringido deber de cuidado u obligación de carácter reglamentario o legal, toda vez que el incendio no se produjo a causa de alguna conducta negligente por parte de ella, y no tiene como causa accidente eléctrico alguno.

Aparece como evidente y notorio, que la causa de los innumerables incendios es diversa. No obstante de ellas, la parte demandante invoca exclusivamente una, esto es la supuesta negligencia de su representada, la que controvierte desde ya en términos absolutos.

Finalmente, además de los puntos indicados y considerando que la parte demandante deberá acreditar que han sufrido un daño, hecho que considera inexistente, estima que en la especie no se configura la responsabilidad civil de esta demandada.

EL DERECHO. Al efecto indica que nuestra doctrina, sobre la base de los artículos 1545 y siguientes, y 2314 y siguientes del Código Civil abordan la cuestión sobre el sujeto pasivo de la acción de indemnización y la relación de causalidad como factor de atribución de la responsabilidad. En este sentido, ALESSANDRI señala: “En principio esta acción sólo puede intentarse contra el que hizo el daño y sus herederos y, por excepción, contra el tercero civilmente responsable y contra el que, sin ser cómplice, recibe provecho del dolo ajeno, pero sólo hasta concurrencia de este provecho y sus respectivos herederos”. Al referirse



al autor señala: “Son autores del daño todos los que contribuyeron a producirlo, sea en calidad de tales, como cómplices o encubridores”.

En este punto, dice, nuestro ordenamiento jurídico es claro, al limitar la legitimidad pasiva únicamente quienes han participado activa o pasivamente en la actuación ilícita que ha causado el daño, o a las demás personas que la ley indica. En el caso de autos, EMELECTRIC no ha participado activa ni pasivamente en la ocurrencia de los hechos demandados y no se encuentra en ninguna de las hipótesis legales.

Por su parte, nuestra jurisprudencia ha señalado que:

“La excepción de falta de legitimación pasiva se conceptúa como la ausencia de la cualidad de titular del derecho de pretender una sentencia favorable respecto de lo que es objeto de litigio -en su faz activa- o bien cuando no media coincidencia entre la persona del demandado y aquella contra la cual la acción está dirigida. Esa falta de legitimación, cuando atenta contra la capacidad o representación, será generalmente materia de una excepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento, pero cuando se dirige contra de la necesaria legitimación determinar en este caso el verdadero responsable del hecho culposos, será materia de fondo, siendo ella un presupuesto procesal de la sentencia”.

CONCLUSIÓN. Establecido lo anterior, en cuanto a los hechos y el derecho, queda claramente formulada la presente excepción y sus fundamentos, resultando que el actor ha errado al intentar su acción en contra de quien no es legitimado pasivo de ella, ya que ni fáctica ni legalmente existe razón alguna para intentar la acción que se emprende en contra de la demandada.

Asimismo, sostiene lo siguiente: (i) No le empece la acción interpuesta en su contra, ya que la normativa invocada por la parte demandante no le es aplicable, no hay acción; (ii) La conducta por omisión supuestamente imputable a su representada no existe, en consecuencia, al no tener participación en los hechos, y desaparecer además el requisito de la causalidad, no tiene la calidad de legitimado pasivo en este juicio; En consecuencia, corresponde pronunciarse respecto de esta falta de legitimación pasiva de su representada.

III. ALEGACIONES DE FONDO - FALTA DE RESPONSABILIDAD DE EMELECTRIC S.A. 1. PRELIMINAR: NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - INEXISTENCIA DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

Sobre esta materia, la parte demandante hace referencia a una serie de normas que regulan la actividad de distribución de energía eléctrica. Explica que



dichas normas se refieren, fundamentalmente, al deber de mantención del tendido eléctrico que pesa sobre todo distribuidor, tendiente a garantizar la continuidad del servicio y evitar daños a terceros.

Es enfática en que la actividad de distribución de electricidad regulada por las normas antes citadas, está sujeta a un régimen que equivale al régimen de responsabilidad civil extracontractual de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. En este sentido, la parte demandante deberá acreditar todos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que tratará en detalle en el siguiente capítulo de esta contestación.

En definitiva, estamos frente a un juicio de responsabilidad civil extracontractual de regla general, es decir, un juicio de responsabilidad por culpa o subjetivo, en el cual se deben acreditar todos los presupuestos que a lo largo de esta actuación desarrollará.

2. LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD.

En cuanto a la responsabilidad extracontractual, Cita a ALESSANDRI que la define como, “aquella que proviene de un hecho ilícito intencional o no que ha inferido injuria o daño a la persona o propiedad de otro [...]. No hay relación entre el autor del daño y la víctima y si la hay el daño se produjo al margen de ella [...]. Supone la ausencia de obligación, se produce entre personas jurídicamente extrañas por lo menos en cuanto al hecho de que deriva y es ella la que crea la obligación de reparar el daño”.

De acuerdo a lo anterior y lo prescrito en el artículo 2314 y siguientes del Código Civil, lo interpretado por la doctrina y la jurisprudencia, la eventual obligación de indemnizar en el marco del estatuto de la responsabilidad civil extracontractual requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) Capacidad delictual, (ii) Acto humano, acción u omisión, (iii) Antijuridicidad, (iv) Daño, (v) Dolo o culpa del agente o autor del acto y (vi) Causalidad.¹⁴

Sobre la responsabilidad civil extracontractual, nuestra jurisprudencia señala: “1.- Que conforme al tenor de la demanda de fojas 1 y siguientes, el asunto a resolver fue situado por los demandantes en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, acorde con lo prevenido en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil.

No puede soslayarse, que si bien es cierto que los demandantes especifican cuales son los hechos imputados a la demandada, también lo es que no precisan en su libelo si la conducta de la demandada es dolosa o culposa.



Ello es importante porque conducta ilícita no es lo mismo que obrar con dolo o culpa.

2.- Que cabe consignar que la responsabilidad extracontractual nace de hechos jurídicos ilícitos, entendiéndose por hecho jurídico, como todo suceso que tiene su origen en la naturaleza o en la acción del hombre que produce consecuencias jurídicas.

El hecho jurídico puede ser lícito o ilícito, y será ilícito aquél en que la conducta humana es contraria a derecho o a las prescripciones legales.

El hecho ilícito civil supone dolo o culpa y daño, de modo que puede constituir delito o cuasidelito.

El delito civil es el hecho ilícito cometido con intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona. También es el hecho ilícito, doloso que causa daño.

El cuasidelito civil es el hecho culpable, pero cometido sin intención de dañar que ha inferido injuria o daño a otra persona.

Y para que haya delito o cuasidelito civil es menester que el hecho sea dañino, o sea, que cause daño, ya que precisamente la obligación que emana del delito y del cuasidelito es la de reparar o indemnizar el daño causado.

3.- Que para que opere la responsabilidad extracontractual es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Capacidad delictual o cuasidelictual del agente; b) una acción u omisión culposa o dolosa; c) daño y d) relación de causalidad entre el hecho doloso o culposo y el daño.

Mientras no concurren todos los requisitos señalados no nace la obligación de indemnizar". Los requisitos enunciados en la forma precedente son situaciones de hecho que evidentemente debe probar la parte demandante. Esta parte controvierte la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil fundante de la demanda de autos.

2.1. EL HECHO En este sentido, esta parte controvierte expresamente que producto de una acción u omisión culpable atribuible a su representada, debiendo el demandante probar dichas alegaciones.

2.2. ACCIÓN U OMISIÓN CULPABLE. En cuanto a la acción u omisión alegada, los demandantes deberán probar todas y cada una de sus afirmaciones. Así, respecto de la efectividad de haber ocurrido el hecho, como cuáles serían las acciones u omisiones o deberes que se imputan, conducentes a establecer la responsabilidad de su representada. Deberá acreditar la supuesta conducta negligente de su parte. Sobre ello, niega categóricamente la asunción de una



conducta –positiva o negativa- generadora del daño. Al respecto, nuestra jurisprudencia ha sostenido que:

“La culpa es la actividad o manifestación de voluntad positiva de un individuo encaminada a producir menoscabo, o bien, la omisión consistente en no precaver aquello que ha debido preverse o evitarse, es decir, una negligencia, desidia, imprudencia que produce menoscabo sin intención de provocarlo”.

Asimismo, ha señalado que: “La responsabilidad extracontractual surge toda vez que se cumplen una serie de requisitos, uno de ellos es que el demandado haya incurrido, en una omisión culposa, que es la negligencia por no hacerse lo que se debe o por realizarse menos de lo que se debe”.

En este sentido ALESSANDRI sostiene que, si un hecho que, aún con mayor diligencia o a costa de un mayor esfuerzo o sacrificio, de todos modos no se pudo haber previsto o evitado, entonces estaríamos frente a una situación de caso fortuito. Estima que no le es imputable conducta – ya sea por acción u omisión – de ninguna clase, que unida al factor de atribución o causalidad, pueda dar lugar a responsabilidad civil extracontractual, en el caso que los daños cuya reparación pretende la parte demandante se hayan producido.

2.3. EL DOLO Y LA CULPA. Ciertamente dice, en el caso de autos, no ha existido dolo, como tampoco se ha alegado. No obstante, el actor sostiene que ha habido culpa de parte de su representada. Ahora bien, existe culpa cuando el sujeto falta con su actuación a la diligencia y cuidado que le es exigido o bien, como señala el Código Civil “es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.”.

Como se aprecia, en uno u otro caso, es una acción u omisión de cuidado. No obstante, en el caso de autos, los hechos acaecidos no son atribuibles a la conducta por omisión a su representada, quien como señaló – y acreditará en la oportunidad procesal correspondiente – siempre ha sido extremadamente diligente en el mantenimiento de sus instalaciones eléctricas.

Concluye de lo anterior, que a su representada no le es imputable ninguna acción u omisión culposa o dolosa de la cual se pueda derivar algún tipo de responsabilidad.

2.4. EL NEXO CAUSAL. En cuanto al nexo causal, no existe tal entre alguna supuesta conducta desplegada por su representada y los daños que habría sufrido la parte demandante, toda vez que, como ya ha indicado anteriormente, no ha infringido deber de cuidado u obligación de carácter reglamentario o legal. El



incendio materia de autos pudo deberse a una serie de factores, por lo cual no es dable presumir su origen eléctrico, sin descartar otras hipótesis investigativas.

El daño requiere que sea consecuencia de la acción u omisión negligente. Sobre este punto considera fundamental lo siguiente: La doctrina ha señalado que la causalidad importa, que debe detectarse un vínculo entre la actuación (u omisión) del agente supuestamente responsable y el hecho dañoso en sí mismo, y así se desprende del artículo 2314 en relación con el artículo 1437, ambos del Código Civil.²⁰ ALESSANDRI ya señalaba que “es menester que entre el dolo y la culpa, por una parte, y el daño, por la otra, haya una relación de causalidad, es decir, que este sea consecuencia o efecto de ese dolo o culpa”. Citando a este autor la jurisprudencia ha sostenido:

“Desde luego, y tal como lo señala don Arturo Alessandri Rodríguez en su obra “De la Responsabilidad Extra Contractual en el Derecho Civil Chileno” [...] ‘para que el hecho a la omisión de una persona capaz de delito o cuasidelito le imponga responsabilidad delictual o cuasidelictual civil, no basta que ese hecho u omisión haya sido ejecutado con dolo o culpa, ni que cause daño: Es menester que entre el dolo o culpa, por una parte, y el daño, por la otra, haya una relación de causalidad, es decir, que éste sea la consecuencia o efecto de ese dolo o culpa’, lo que por lo demás aparece recogido en el artículo 2329 del Código Civil”. En relación a este mismo tema, si bien la jurisprudencia ha reconocido que la determinación de la causa y el nexo causal es difícil de establecer, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, de manera determinante:“ c) El supuesto demandado o el supuesto responsable, lo será cuando esté acreditado de manera aceptable o en una alta proporción que existe luego de establecer la causa, un claro nexo causal entre el hecho acaecido y su conducta (diligencia, cuidado). d) Finalmente, no se puede condenar a ningún sujeto de derecho si en el proceso no hay claridad sobre la causa ni menos sobre el nexo causal”.

Destaca que la relación de causalidad es un elemento fundamental en la responsabilidad civil, así debe considerarse en la especie y así lo ha reconocido la jurisprudencia, al señalar: “No hay duda que esta relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño producido es un elemento de la esencia de la responsabilidad extracontractual. Puede haber culpa, dolo, capacidad y daño y no existir responsabilidad. El daño tiene que ser la consecuencia lógica de la conducta del agente, según el decir del prestigioso jurista René Savatier”.

“En el contexto de la responsabilidad civil extracontractual, es estrictamente necesario para que ésta proceda, la existencia de un hecho ilícito, que haya



causado un daño –entendido como perjuicio, menoscabo o pérdida–, y que el mencionado daño haya sido consecuencia necesaria y directa de la acción u omisión dolosa o culposa, en otras palabras, que exista una relación de causalidad entre el ilícito y el daño.”

Y sobre la necesidad de prueba de la relación causal, nuestra reciente jurisprudencia señala: “QUINTO: Que, el nexo causal o causalidad, esto es, “la relación entre el hecho por el cual se responde y el daño provocado”, la que debe ser necesaria y directa, es decir, substancial (Barros Bourie, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, pag. 373 y 374) , que en la especie, se constata en el vínculo entre las omisiones negligentes de las demandadas como son no tomar las precauciones necesarias para evitar caídas y falta de control de las mismas por la beneficiada con la obra y el resultado dañoso, por lo que les asiste responsabilidad extracontractual, debiendo, corolario, indemnizar a las actoras por los daños efectivamente causados y acreditados, en la especie, daño emergente y daño moral, toda vez que respecto del lucro cesante no se rindió prueba alguna por la parte demandante, correspondiéndole hacerlo de conformidad a lo prevenido en el artículo 1698 del Código Civil”.

Asimismo, ha sostenido que: “Séptimo: Que, de todo lo anterior y en ausencia del presupuesto que hace exigible la indemnización de perjuicios que se reclama, toda vez que no fue suficientemente demostrado que existió un hecho ilícito que causó daños; ni menos aún puede establecerse una relación de causalidad entre un actuar reprochable del demandado y el resultado dañoso producido, se hace patente la falta de soporte de la acción intentada por el actor (...) a consecuencia de lo cual se procederá a rechazar la demanda de indemnización de perjuicios impetrada, sin costas por haber existido motivo plausible para litigar”.

En consecuencia, la parte demandante deberá demostrar la relación causal entre la supuesta conducta negligente que alegan habría existido por parte de su representada, el presunto incendio y los perjuicios que el demandante hipotéticamente habría sufrido a causa de este.

2.5. EL DAÑO. En cuanto a éste presupuesto de la responsabilidad, es fundamental tener en cuenta que, de conformidad a los actuales principios de reparación, el daño es el elemento principal, el objeto del juicio, la cosa pedida. Éste debe reunir una serie de características para que proceda su indemnización. A su vez, nuestra jurisprudencia ha sido clara en señalar que, para que un hecho



culposo cause responsabilidad civil es indispensable que cause daño y se pruebe su monto.

A este respecto nuestra jurisprudencia ha dicho: “Para que el daño sea indemnizable se requiere que sea cierto, esto es real y no hipotético, y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico debe demostrarse por los medios de prueba aceptados por la ley. Es la prueba la que garantiza que el juzgador se ha convencido acerca de la verdad de las proposiciones de las partes de un proceso.

Los daños deben ser probados por quien los alega conforme con el artículo 1698 del Código Civil, en este caso, es de cargo de la actora el peso de la prueba. De acuerdo a lo expuesto, es menester determinar si se han probados los perjuicios invocados.

Por las razones expuestas se concluye que la parte demandante no rindió pruebas conducentes a acreditar la existencia del perjuicio efectivo invocado y en consecuencia no es posible acceder a su pretensión indemnizatoria por no haberse comprobado la concurrencia de uno de los requisitos de la responsabilidad extracontractual, esto es, el daño”.

En efecto, no todo daño es indemnizable, debe reunir determinados requisitos, a saber: (i) Debe ser cierto; (ii) Debe ser personal; (iii) Debe ser directo; (iv) Causados por un tercero distinto a la víctima; y (v) No debe estar reparado. En cuanto a la certidumbre del daño, la doctrina exige que el daño reparable sea cierto. El requisito de la certidumbre hace referencia a la materialidad del daño, a su realidad. La certidumbre del daño solo puede resultar de su prueba. A su turno, CORRAL, sostiene que el daño resarcible debe ser cierto, real y efectivo. No se indemniza aquel que tiene caracteres de incierto, hipotético o eventual.

Finalmente, y en cuanto al daño, RODRÍGUEZ incluye el requisito de no haber sido reparado; ello parece lógico, sin embargo, hay que cuidar que ello sea efectivo, ya que si la víctima haciendo uso de algún seguro reparó parcialmente el daño, el detrimento o daño será menor; lo contrario importaría un enriquecimiento sin causa.

2.6. CONCLUSIÓN. En razón de lo anterior es que la parte demandante deberá probar cada uno de los presupuestos de la responsabilidad que se le imputa a su representado, los cuales para estos efectos no reconocen ninguno de ellos.

En este sentido, ha señalado nuestra jurisprudencia lo siguiente: “7.- Que, en relación al peso de la prueba en la responsabilidad extracontractual, el onus probandi recae sobre el demandante o acreedor, quien debe acreditar el hecho doloso o culposo imputado al demandado.



En materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual es la víctima que reclama la correspondiente indemnización quien debe probar el hecho doloso o culpable que imputa al demandado, salvo que la ley presuma la culpabilidad de éste (...); a falta de esta prueba, la demanda será rechazada (Arturo Alessandri Rodríguez, De la Responsabilidad Extra - Contractual en el Derecho Civil Chileno. Segunda Edición. Tomo I. Ediar Editores Ltda. Página 52 y 53).

El artículo 1698 del Código Civil dispone que incumbe probar las obligaciones a quien las alega; en el caso presente, la de indemnizar el daño causado nace precisamente del delito o cuasidelito que invoca el demandante.

El que "demanda indemnización por responsabilidad extracontractual tiene que probar el dolo (art. 1459) o la culpa del autor de los daños (René Ramos Pazos, De la Responsabilidad Extracontractual. Universidad de Concepción. 2003. Página 50).

IV. INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

1. PRELIMINAR. Controvierte totalmente el hecho que los demandantes hayan sufrido algún daño o perjuicio, más aún, de haber sufrido alguno, controvierte el que estos sean imputables a alguna conducta desplegada por su representada, o algún incumplimiento obligacional o legal, ya que no existe relación causal entre aquellos y alguna conducta de EMELECTRIC. No obstante lo anterior, analiza a la luz de la doctrina y la jurisprudencia su procedencia, conforme a los actuales principios de reparación.

2. DAÑO EMERGENTE. La doctrina define el daño emergente como el "detrimento patrimonial efectivo que experimenta uno de los contratantes con ocasión del incumplimiento. Consiste en la diferencia que se produce en el activo del patrimonio de una persona, como consecuencia del incumplimiento contractual [...]".

Como todo daño, el emergente debe ser probado. Sobre ello nuestra jurisprudencia señala: "Que, para que el daño sea indemnizable se requiere que sea cierto, esto es real y no hipotético, y de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico debe demostrarse por los medios de prueba aceptados por la ley. Es la prueba la que garantiza que el juzgador se ha convencido acerca de la verdad de las proposiciones de las partes de un proceso. Que los daños deben ser probados por quien los alega conforme con el artículo 1698 del Código Civil, en este caso, es de cargo de la actora el peso de la prueba. De acuerdo a lo expuesto, es menester determinar si se han probados los perjuicios invocados".



De lo expuesto, se requiere que el actor genere algún medio de prueba fehaciente, que permita acreditar la naturaleza y cuantía de los daños que se reclama por este concepto. Como sostiene CORRAL, “el daño debe ser probado en el proceso, de lo contrario no puede ser objeto de indemnización”.

Asimismo, los demandantes deberán acreditar la relación causal entre la conducta antijurídica que sostiene es imputable a su representada y los supuestos perjuicios que reclama. Por ende, controvierte que los demandantes hayan tenido perjuicios por concepto de daño emergente. Además, controvierte en su totalidad las cifras por dichos conceptos demandada e insiste que será de cargo de los demandantes acreditarlas en juicio. Corresponde a los actores demostrar la existencia de cada uno de los daños cuya reparación pretende y que estos tienen como causa única y directa el incumplimiento culpable que atribuye a su representada. El demandante, exige indemnización de daño emergente por la exacerbada suma de \$130.000.000 de los cuales \$115.000.000 corresponderían a las especies de Eucaliptus que se habrían perdido a causa del incendio, y otros \$15.000.000., a los cercos construidos e instalados, que se habrían visto afectados por las llamas.

Controvierte dicho perjuicio, razón por la cual el demandante deberá acreditar la existencia de los árboles por cuyo incendio reclama, así como también la cantidad, valor, y antigüedad de los mismos. También deberá hacer lo anterior con los montos que demanda por el cerco presumiblemente destruido.

3. LUCRO CESANTE. La doctrina y la jurisprudencia han definido el lucro cesante como “la utilidad, provecho o beneficio económico que una persona deja de obtener como consecuencia de un hecho ilícito”. Asimismo, para que proceda su indemnización resulta indispensable que aquel daño, aun cuando sea futuro, tenga certeza que ocurrirá. En este sentido las pretensiones de los demandantes no se pueden fundar en una mera expectativa, sobre la base de hipótesis especulativas y eventuales. Según ha concluido la doctrina y la jurisprudencia, el daño resarcible debe ser cierto, real y efectivo, razón por la cual no se indemniza el daño que tenga características de incierto, hipotético o eventual.

De lo señalado, interesa determinar la postura de nuestra jurisprudencia, que señala: “DECIMOSEXTO: Que, el “lucro cesante, o perjuicio sobrevenido, o simplemente perjuicio, según la terminología de otros códigos, comprende lo que el acreedor deja de ganar con motivo de la infracción del contrato. Es la ganancia frustrada, sobre la base de lo que probablemente habría ganado el acreedor. Su carácter es complejo y vago, carente de base completamente firme. Por eso



incumbe al Derecho lograr la justa separación entre los ‘sueños de ganancias’ y el lucro verdadero dejado de percibir (Fueyo. ob. cit., pág. 327). La prueba del lucro cesante ofrece mayores dificultades que la del daño emergente por lo que, para evaluarlo, deben proporcionarse antecedentes que posean tal precisión y certidumbre, que permitan determinar con claridad una ganancia probable que dejó de percibirse. DECIMOSÉPTIMO: Que, aparte de la aseveración efectuada por el actor en su demanda, no obra en autos prueba alguna sobre la existencia del lucro cesante alegado; y, teniendo en cuenta que, a menos que pueda imputársele dolo, el deudor solo será responsable de los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento (artículo 1558 inciso 1º Código Civil); y considerando, además, que adolecería de nulidad la sentencia que acoja una demanda de indemnización de perjuicios por lucro cesante sin dar por establecidos los fundamentos que señala la disposición legal citada, esta Corte revocará el fallo en lo que a la indemnización del lucro cesante se refiere”.

Consecuencia de lo anterior es que el daño que se reclama por este concepto deberá probarse en toda su extensión, no solamente incumbe probar la relación causal, sino que además el daño propiamente tal.

El demandante de autos, sin entrar en mayores detalles, demanda la indemnización de \$20.000.000, a títulos de lucro cesante, en atención a la diferencia del valor que debió percibirse por las especies siniestradas, si se hubiera efectuado la cosecha en el periodo de rotación programada. Al igual que en el caso de daño emergente, el valor de la indemnización requerida a título de lucro cesante deberá ser probado por la parte demandante.

V. EN CUANTO A LOS REAJUSTES E INTERESES - COSTAS.

1. REAJUSTES E INTERESES. Respecto de los reajustes sobre la suma indemnizatoria, sostiene que éstos deben de considerarse únicamente desde la fecha en que estos se declaren, ergo desde la sentencia firme y ejecutoriada.

Acorde con el criterio anterior, BARROS sostiene, al citar una sentencia de alzada de la Corte de Apelaciones de Concepción que “la jurisprudencia acierta en otorgar reajuste para la indemnización por daño moral desde la fecha de la sentencia en que éste es avaluado y, para el daño patrimonial, desde la fecha que se adopte como referencia para avaluar los perjuicios y, en subsidio, desde la fecha de la sentencia definitiva de primera o de segunda instancia, [...]”.



Ya respecto de los intereses estos se deben considerar únicamente desde la fecha en que la hipotética sentencia condenatoria se encuentre en situación de cumplirse, no antes, y calculados de manera lineal, esto es, no se capitalizan los intereses del periodo anterior para los efectos de calcular el subsiguiente.

2. RESPECTO DE LAS COSTAS. A su entender, no puede ser condenada en costas, toda vez que esta defensa ha tenido motivo plausible para litigar y difícilmente tendrá la calidad de totalmente vencida. Así y conforme a lo expuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil su representada debe ser eximida del pago de las costas del juicio.

CON LO RELACIONADO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:

A) SOBRE TACHAS:

PRIMERO: Que en la audiencia de 11/10/2019, la parte demandada formula la tacha del numeral 7° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil al testigo don BERNANDO ANTONIO PALMA MORENO, y la falta de imparcialidad del testigo la hace consistir en que el deponente ha declarado en forma previa que tiene una relación de amistad y conocer hace más de 15 años a Juan Carlos Mella, representante legal de la sociedad demandante. En este sentido, dice que, de la propia declaración del testigo al reconocerse como amigo del representante legal de la demandante se puede desprender su parcialidad para declarar en este pleito, y por el tiempo que señala conocer al señor Mella, estima que se configura el requisito de gravedad exigido por el legislador para dar lugar a la tacha.

SEGUNDO: Que la tacha propuesta será desestimada por cuanto el testigo declaró previamente que trabajó para el Sr. Mella cuidando la parcela, y que ahora no trabaja para él y no tiene contacto, de lo que se desprende que lo inferido por la demandada de la declaración previa del testigo para fundamentar su tacha, no es efectivo.

B) EN CUANTO AL FONDO:

TERCERO: Que con su demanda de 23/8/2017 el actor persigue que se condene a la demandada a pagar a su representada por concepto de indemnización de perjuicios la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), más los intereses y reajustes que correspondan; o bien, la suma que se determine de conformidad a derecho y al mérito del proceso, con expresa condenación en costas.



Fundamenta su demanda en que su representada mediante escritura pública de fecha 13 de Noviembre del año 2009, otorgada en la Notaria Pública de Santiago de don Eduardo Diez Morello, adquirió por compra a la Sociedad Comercializadora y Asesorías Serrcapp Limitada, los siguientes inmuebles a saber: **a.** Lote Número Uno, que es parte de la propiedad ubicado en lugar denominado. El Culenar, Comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro, Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 19,17 hectáreas. Rol de avalúo 45-29 de la Comuna de Litueche. La propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada a fojas 442, N° 443, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes y Raíces de Litueche, correspondientes al año 2010. **b.** Lote Numero Dos, que es parte de la propiedad ubicado en lugar denominado El Culenar, Comuna de Litueche, Provincia cardenal Caro, Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 26,66 hectáreas. Rol de avalúo 45-30 de la Comuna de Litueche. La propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada a fojas 443, N° 444, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes y Raíces de Litueche, correspondientes al año 2010. **c.** Hijuela Dos de Santa Ana, que es parte de los sectores uno y siete de la ex hacienda Santa Mónica, ubicada en la comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 35,85 hectáreas. Rol de avalúo 65-120 de la Comuna de Litueche. La propiedad se encuentra inscrita a nombre de su representada a fojas 444, N° 445, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes y Raíces de Litueche, correspondiente al año 2010.

Las antedichas propiedades colindan entre si y forman un predio de aproximadamente 3 81,67 hectáreas.

Agrega que con fecha 29 de enero de 2012, aproximadamente a las 12.00 horas, se originó un incendio forestal en el Lote N°1 en la parte baja de un lomaje, aproximadamente a 50 metros al oriente del paso de servidumbre en las coordenadas UTM 19H 241818 6217503, con dirección de avance del fuego Noreste, subiendo por la pendiente, que afectó los predios de propiedad de su representada quemando prácticamente todas las extensiones de bosques y plantaciones existentes en ellos.

Se extendió al Lote N°2 y la Hijuela Dos de Santa Ana, y posteriormente se extendió a diversos predios, entre ellos los de propiedad del señor Antonio Molfino Chiorrini y de don Andrés Bomcompte Adreau, afectando una superficie aproximada de 140 hectáreas de especies arbóreas tales como pino, eucalipto y vegetación típica de la zona.



Indica que de acuerdo al Informe Técnico de Incendio Forestal, del departamento del Manejo del Fuego de la Corporación Nacional Forestal, el incendio forestal en comento se produjo 8 kilómetros al oeste de Litueche y afectó una superficie total de 140 hectáreas; la superficie afectada se desglosa de la forma que sigue

VEGETACIÓN	SUPERFICIE (Hectáreas)
PINO	30,00
EUCALIPTO	40,00
OTRAS PLANTACIONES	0,00
ARBOLADO	0,00
MATORRAL	35,00
PASTIZAL	35,00
DESECHO	0,00
AGRÍCOLA	0,00
TOTAL AFECTADO	140,00

Expresa que el incendio dio lugar al inicio de la correspondiente Investigación Criminal por Incendio de Bosques, dando origen a la Causa RUC Número 12001155449-2. De los antecedentes reunidos en la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público se puede establecer la efectividad de haberse originado el incendio en el Lote número 2 y la Higuera 2 de Santa Ana, y de allí a otros inmuebles, sino que también, las causas del mismo.

En efecto y a la luz de tales antecedentes, el incendio se originó en el Lote número 1, en el área o zona denominada “franja de seguridad” de un tendido eléctrico de media tensión perteneciente a la EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A..

Con anterioridad a la ocurrencia del siniestro, en el lugar de los hechos, el tendido eléctrico se encontraba unido por dos postes, el poste número 52, ubicado aproximadamente en las coordenadas UTM 19H 241891 (norte) y 6217900 (este) y el poste número 50, numeración 5/0283361 de tendido eléctrico, ubicado aproximadamente en las coordenadas UTM 19H 242276 (norte) y 6217657 (este), existiendo una distancia entre uno y otro de 452 metros.

El incendio se originó por un corte o desprendimiento de un cable de la instalación eléctrica, producido en un punto intermedio de la distancia existente entre los postes número 52 y 50, el cual, al estar energizado y tomar contacto con la vegetación y hierbas secas existentes en el suelo, dio lugar al foco del incendio descrito precedentemente, extendiéndose dramáticamente en la forma ya relatada, quemando y dañando más de 140 hectáreas de plantaciones forestales, arbustos y pastizales. En este mismo sentido, señala, que el Informe Técnico de Incendio Forestal, del Departamento de Manejo del Fuego de la Corporación



Nacional Forestal (CONAF), a enunciar las causa del siniestro señaló textualmente que, “Según lo estimado por personal de CONAF, la causa estaría calificada por el código 01.09.03 que dice relación con corte de cable por caída de tendido eléctrico o postación”.

Indica que la presente acción no se encuentra prescrita, sobre el particular hace presente que con fecha 10 de julio 2013, interpuso, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, acción de indemnización de perjuicios. La demanda, Emelectric, opuso excepción de incompetencia con fecha 04 de noviembre, la cual fue fallada, declarándose la incompetencia del Tribunal, con fecha 12 de enero del año 2015.

Razón de lo anterior y habiéndose deducido oportunamente las acciones en cuestión, la prescripción se interrumpió durante dicho período, mérito por el cual a su juicio está dentro de plazo para formular esta demanda.

Obligaciones incumplidas por la demandada. Al efecto sostiene que es sabido que la demandada, en su calidad de tal, tiene dos obligaciones o deberes fundamentales cuyo incumplimiento trae aparejado, responsabilidad, cuales son, **el deber de mantención** y el deber **de revisión periódica** de las instalaciones eléctricas, por cuanto ellas solas por su sola existencia constituyen un elemento de riesgo que exige adoptar todas las medidas conducentes a su plena estabilidad y seguridad, todo ello con el objeto de evitar daños a las personas y cosas.

Destaca, que los antecedentes e informes técnicos evacuados en el marco de la referida investigación criminal, demuestran que el desprendimiento del cable energizado de las instalaciones eléctricas ocurrió debido a la fatiga de material del tendido eléctrico de la demandada, y tal lamentable suceso se debió a la más absoluta falta de mantención de la franja de seguridad y de la línea eléctrica misma pues, precisamente, no dio cumplimiento a las obligaciones ya referidas.

Indica que los informes y evidencia obtenida, atribuye la responsabilidad a la demandada, cita el informe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile en el Informe Policial N°338/00851, del 08 de Mayo de 2012, y el Informe Pericial Medioambiental (O) N°110 de fecha 4 de Junio de 2012, emanado por las Sección de Ecología y Medioambiente de la Policía de Investigaciones de Chile, ambos antecedentes en los cuales aparece la responsabilidad de la demandada en el incendio. Suma a estos antecedentes las declaraciones de testigos contenidas en la carpeta de investigación, que atribuyen responsabilidad a la demandada.



Manifiesta que la génesis del deber de la demandada de evitar el resultado lesivo, proveniente de un contenido normativo infringido. Refiere en primer término el Decreto Concesionario N°517 de 16 de Julio de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y Construcción para establecer, operar y explotar esa instalación de servicio público de distribución de energía eléctrica que en artículo 8 dispone: “La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto en el D.F.L N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, y queda sometida a todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia”.

Por su parte, la Ley General de Servicios Eléctricos (D.F.L N° 1 de 1982 de Minería, refundido y sistematizado por el Decreto Fuerza de Ley N° 4 del año 2006) en adelante “LGSE”, en su artículo 139 dispone: “Es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar el peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes”

Esta mantención, es decir, el deber de la demandada de prevenir los riesgos, la vincula la ley con el principio general del servicio eléctrico: la calidad del servicio, en su acepción de seguridad. En efecto, el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante simplemente “RLGSE”, contempla las siguientes normas relativas a la materia:

Artículo 205, conforme al cual: “Es deber de todo operador de instalaciones eléctricas en servicio, sean de generación, transporte o distribución, y de todo aquel que utilice instalaciones interiores, mantenerlas en buen estado de conservación y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas”

Artículo 214: “Los operadores de instalaciones eléctricas deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, que produzcan riesgo a la seguridad de las personas o daño en las cosas, que obstruyan las vías públicas o dificulten el tránsito normal de las personas y vehículos.”

Artículo 222, inciso 2º: “la calidad de servicio incluye, entre otros, los siguientes parámetros: [...] f) La oportuna atención y corrección de situaciones de emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y otros imprevistos” .

Artículo 214: “Los operadores de instalaciones eléctricas deberán contar con personal de emergencia para la reparación de fallas que afecten la continuidad o la calidad del suministro, que produzcan riesgo a la seguridad de las



personas o daño en las cosas, que obstruyan las vías públicas o que dificulten el tránsito normal de las personas y vehículos”.

En este caso concreto, indica, EMELECTRIC incumplió sus deberes de cuidado, de mantención y conservación, normativamente establecidos, en las normas jurídicas ya invocadas.

Indica que la causa inmediata y directa de todos los perjuicios sufridos y que reclama está constituida en términos generales por el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la demandada. Al efecto, dichos perjuicios son la pérdida de más de 22 hectáreas de EUCALIPUS GLOBULUS (eucalipto), el daño emergente está dado por el valor económico que tenían dichos bosques a la fecha del siniestro, pues en esa fecha (8 años promedio) ya eran susceptible de aprovechamiento comercial. Igualmente se ha producido un lucro cesante, correspondiente a la diferencia del valor que debió percibirse por las especies siniestradas, si se hubiera efectuado la cosecha al término del periodo de rotación programado (13 años promedio).

El valor comercial de las plantaciones de eucaliptos, a la fecha del siniestro, alcanzaba los \$115.000.000.-, correspondiente al daño emergente que por concepto de la quema de estas plantaciones ha sufrido su representada; y el lucro cesante alcanzó a \$20.000.000.-

A mayor abundamiento, la propiedad de surepresentada, con motivo del incendio, perdió la totalidad de los cercos construidos e instalados, los cuales fueron nuevamente construidos, asimismo se vieron afectadas numerosas hectáreas de pastizales y demás especies nativas. Por este concepto ha sufrido un daño emergente que alcanza a \$15.000.000.-

Los demás fundamentos de hecho y derecho de la demanda han quedado íntegramente reproducidos en la parte expositiva de la presente sentencia.

CUARTO: Que con fecha 15 de Junio de 2018 doña STEFANIE RAMDOHR MONTGOMERY, abogado, en representación de CGE DISTRIBUCIÓN S.A (en adelante indistintamente “CGED”), en su calidad de continuador legal de EMPRESA ELÉCTRICA DE MELIPILLA, COLCHAGUA Y MAULE S.A (en adelante indistintamente “EMELECTRIC”), contesta la demanda de autos, solicitando el rechazo de ellas en todas sus partes, todo ello con costas.

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEXTA REGIÓN EN ENERO DE 2012. En este punto de su defensa sostiene que en atención a las alegaciones de responsabilidad formuladas por los demandantes –



que controvierte en su totalidad-, es fundamental que se considere previamente las características del lugar y la época en la que ocurrieron los hechos, en particular debido al supuesto nexo de causalidad que se alega en la especie.

Señala que a sexta región desde hace años se encuentra sufriendo una sequía histórica, producida por la falta de lluvias y elevadas temperaturas, factores que pudieron haber resultado determinantes en el inicio y propagación del incendio materia de autos. A mayor abundamiento, tan solo 3 días antes de que desatara el incendio, el Ministerio de Agricultura decretó “Emergencia Agrícola” en 22 comunas de la VI Región de O’Higgins, incluyendo la comuna de Litueche.

Las formulaciones hechas, apuntan a graficar de modo claro la compleja situación que se vivía en la zona. Además, debemos tener en consideración que el incendio tuvo lugar entre los meses de enero y febrero, fecha en que la zona es visitada por turistas, que acampan en diversos lugares, hecho que incrementa el riesgo de incendio.

Insiste, entonces, que en este proceso la problemática de la causa o nexo causal de los supuestos daños sufridos por el demandante debe quedar fehacientemente asentada. Se descarta, a su parecer, toda posible elaboración de presunciones o informes que no sean absolutamente certeros y científicos.

Controvierte en definitiva, que el demandante haya sufrido algún perjuicio con ocasión del incendio de enero de 2012; asimismo, controvierte que el demandante sea dueño de la propiedad que indica, que exista un vínculo causal entre alguna acción u omisión imputable a su representada y algún daño o perjuicios que hipotéticamente hubieran sufrido.

II. EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Al respecto señala que en conformidad a lo dispuesto en los artículos 2332, 2492 y a los artículos 2514 y siguientes, todos del Código Civil, opone la excepción perentoria de prescripción extintiva, como modo de extinguir la acción judicial materia de autos.

En primer lugar, señala que el actor en su libelo sustenta su acción en base del régimen de responsabilidad extracontractual, contenido en el título XXXV del Libro IV del Código Civil.

Tomando en consideración que los demandantes han invocado un régimen de responsabilidad estrictamente civil, debe atenderse exclusivamente a las disposiciones que contiene el Código Civil sobre la materia.



Sostiene que los demandantes respecto de los cuales se opone esta excepción, accionan buscando la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, por un incendio ocurrido el día 29 de enero de 2012.

- Pues bien, dice, según el estampado receptorial extendido por el ministro de fe, don Luis Claudio Vega Navarro, la demanda de autos fue notificada a su representada el día 4 de diciembre de 2017, esto es a 5 años, 10 meses y 5 días de los hechos en los cuales se funda la presente acción, período que excede con creces el plazo de 4 años exigido por el artículo 2332 del Código Civil.

III. EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE Y EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE EMELECTRIC S.A. 1. Cuestión preliminar sobre la legitimación para litigar.

En este capítulo de su contestación explica que previo a los argumentos en los que se sustenta la excepción interpuesta, considera de suma relevancia, referirse entonces a la acción. Respecto de quién o quiénes son titulares de la misma y en contra de quién o quiénes puede ser ejercida, de manera tal, que dicho acto que da inicio al proceso sea conducente al fin del mismo: la dictación de una sentencia que resuelva el conflicto.

2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE. Refiere sobre el particular que en el caso de autos nos encontramos ante un solo demandante quien presenta el libelo indemnizatorio en contra de su representada. Para intentar esta acción y por lo tanto, tener legitimación activa para demandar, es requisito indispensable que quien demanda tenga alguna de las calidades establecidas en el artículo 2315 del Código Civil.

El demandante que señala que demanda la indemnización de perjuicios en su calidad de dueño de las propiedades que indica, en razón de haber sufrido un supuesto daño, por lo que deberá acreditar en este juicio lo siguiente: - Su calidad de propietario. - Su calidad de único propietario. - No haber otorgado el usufructo de las propiedades a terceros. - Haber sufrido un daño. Recuerda que el daño es el centro de la responsabilidad, sin daño no hay responsabilidad, por lo que su correlativa acción no existe. La falta de daño demuestra la falta de condición de la acción y su consiguiente falta de legitimación.

3. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE EMELECTRIC.

En este apartado manifiesta que la parte demandante ha errado al intentar su demanda en contra de su representada en atención a que, no ha tenido participación alguna en los hechos en que se funda la acción resarcitoria de autos



y no existe relación causal entre algún daño que se reclama y alguna acción u omisión atribuible a su representada, mal podría EMELECTRIC ser el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

Su representada no ha infringido deber de cuidado u obligación de carácter reglamentario o legal, toda vez que el incendio no se produjo a causa de alguna conducta negligente por parte de ella, y no tiene como causa accidente eléctrico alguno.

III. ALEGACIONES DE FONDO - FALTA DE RESPONSABILIDAD DE EMELECTRIC S.A. 1. PRELIMINAR: NORMAS APLICABLES A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA - INEXISTENCIA DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA.

Sobre esta materia, la parte demandante hace referencia a una serie de normas que regulan la actividad de distribución de energía eléctrica. Explica que dichas normas se refieren, fundamentalmente, al deber de mantención del tendido eléctrico que pesa sobre todo distribuidor, tendiente a garantizar la continuidad del servicio y evitar daños a terceros.

Es enfática en que la actividad de distribución de electricidad regulada por las normas antes citadas, está sujeta a un régimen que equivale al régimen de responsabilidad civil extracontractual de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. En este sentido, la parte demandante deberá acreditar todos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual que tratará en detalle en el siguiente capítulo de esta contestación.

En definitiva, estamos frente a un juicio de responsabilidad civil extracontractual de regla general, es decir, un juicio de responsabilidad por culpa o subjetivo, en el cual se deben acreditar todos los presupuestos que a lo largo de esta actuación desarrollará.

2. LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD.

Controvierte expresamente que producto de una acción u omisión culpable atribuible a su representada, debiendo el demandante probar dichas alegaciones, que son los presupuestos para que opere la responsabilidad extracontractual. Niega categóricamente la asunción de una conducta –positiva o negativa– generadora del daño. Concluye en definitiva, que a su representada no le es imputable ninguna acción u omisión culposa o dolosa de la cual se pueda derivar algún tipo de responsabilidad.

IV. INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.



1. PRELIMINAR. Controvierte totalmente el hecho que los demandantes hayan sufrido algún daño o perjuicio, más aún, de haber sufrido alguno, controvierte el que estos sean imputables a alguna conducta desplegada por su representada, o algún incumplimiento obligacional o legal, ya que no existe relación causal entre aquellos y alguna conducta de EMELECTRIC. No obstante lo anterior, analiza a la luz de la doctrina y la jurisprudencia su procedencia, conforme a los actuales principios de reparación.

2. DAÑO EMERGENTE. Controvierte que los demandantes hayan tenido perjuicios por concepto de daño emergente. Además, controvierte en su totalidad las cifras por dichos conceptos demanda e insiste que será de cargo de los demandantes acreditarlas en juicio. Corresponde a los actores demostrar la existencia de cada uno de los daños cuya reparación pretende y que estos tienen como causa única y directa el incumplimiento culpable que atribuye a su representada. El demandante, exige indemnización de daño emergente por la exacerbada suma de \$130.000.000 de los cuales \$115.000.000 corresponderían a las especies de Eucaliptus que se habrían perdido a causa del incendio, y otros \$15.000.000., a los cercos construidos e instalados, que se habrían visto afectados por las llamas.

3. LUCRO CESANTE. El demandante de autos, demanda la indemnización de \$20.000.000, a títulos de lucro cesante, en atención a la diferencia del valor que debió percibirse por las especies siniestradas, si se hubiera efectuado la cosecha en el periodo de rotación programada. Al igual que en el caso de daño emergente, el valor de la indemnización requerida a título de lucro cesante deberá ser probado por la parte demandante.

V. EN CUANTO A LOS REAJUSTES E INTERESES - COSTAS.

1. REAJUSTES E INTERESES. Respecto de los reajustes sobre la suma indemnizatoria, sostiene que éstos deben de considerarse únicamente desde la fecha en que estos se declaren, ergo desde la sentencia firme y ejecutoriada.

2. RESPECTO DE LAS COSTAS. A su entender, no puede ser condenada en costas, toda vez que ha tenido motivo plausible para litigar y difícilmente tendrá la calidad de totalmente vencida. **Los demás antecedentes de hecho y de derecho han quedado íntegramente consignados en la parte expositiva de esta sentencia;**

QUINTO: Que son hechos no controvertidos de la presente causa, los siguientes: **1)** Que con fecha 29 de enero de 2012, aproximadamente a las 12.00 horas, se originó un incendio forestal que afectó, entre otras, a las siguientes



propiedades: **a.** Lote Número Uno, que es parte de la propiedad ubicado en lugar denominado El Culenar, Comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro, Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 19,17 hectáreas. Rol de avalúo 45-29 de la Comuna de Litueche. **b.** Lote Numero Dos, que es parte de la propiedad ubicado en lugar denominado El Culenar, Comuna de Litueche, Provincia cardenal Caro, Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 26,66 hectáreas. Rol de avalúo 45-30 de la Comuna de Litueche. **c.** Higuera Dos de Santa Ana, que es parte de los sectores uno y siete de la ex hacienda Santa Mónica, ubicada en la comuna de Litueche, Provincia Cardenal Caro Sexta Región. Tiene una superficie aproximada de 35,85 hectáreas. Rol de avalúo 65-120 de la Comuna de Litueche. Las antedichas propiedades colindan entre si y forman un predio de aproximadamente 3 81,67 hectáreas. **2)** Que EMELECTRIC, es dueña de la línea eléctrica denominada “Electrificación sector Cartagena El Culenar”, la que se encuentra ubicada en el sector El Culenar, de la comuna de Litueche, y está destinada al servicio público de distribución de energía eléctrica. Presenta, entre otras, las siguientes características: **a.** Fue construida durante el año 1999. **b.** De media tensión (13.200 volts). **c.** Longitud de 4.683 metros. **d.** Fue instalada con motivo del Decreto de Concesión N° 517 del 16 de Julio de 18 1996, en adelante también simplemente “El Decreto de Concesión”. **e.** Se encuentra emplazada en el predio Rol 45-29 y en el predio Rol 45-30, 20 correspondiente al lote N° 1 y al Lote N° 2 respectivamente, ambos de propiedad de su representada. **3)** Que a raíz del incendio el demandante con fecha 10 de julio 2013, interpuso, ante el Juzgado de Letras y Garantía de Litueche, acción de indemnización de perjuicios. **4)** Que en la causa la demanda, Emelectric, opuso excepción de incompetencia, la cual fue fallada, declarándose la incompetencia del Tribunal, con fecha 12 de enero del año 2015.

SSEXTO: Que los hechos controvertidos del proceso son: 1) Que la demandada sea la responsable del incendio de fecha 29 de enero de 2012, por cuanto el actor sostiene la afirmativa, y la demandada, señala que pueden haber diversas causas que originaron el siniestro que no son de su responsabilidad. **2)** Que el actor sea dueño de los predios en los cuales el incendio quemó los árboles existentes en ellos. Toda vez que el actor sostiene la afirmativa, en tanto la demandada lo controvierte. **3)** La existencia de perjuicios, el vínculo causal, su naturaleza y monto.

SEPTIMO: Que, quien tiene una pretensión y la hace valer en juicio, debe acreditar fehacientemente los fundamentos de hecho en que esta se apoya, en la



especie, la parte demandante, quien para acreditar sus asertos rindió las siguientes probanzas:

I. DOCUMENTAL: Con fecha 17/10/2019, acompañó los siguientes antecedentes: 1) Copia parte de denuncia de incendio. 2) Copia declaración voluntaria prestada por testigo don Leonardo Edy Olguin Contreras ante Carabineros de Chile. 3) Copia declaración voluntaria prestada por testigo don Ernesto Segundo Olguin Contreras ante Carabineros de Chile. 4) Testimonio fotográfico después de ocurrido el incendio. 5) Informe Técnico Incendio Forestal de CONAF. 6) Copia declaración voluntaria prestada por testigo don Mauricio Palma Andrews a Policía de Investigaciones. 7) Set fotográfico con descripción de Policía 1 de Investigaciones de Chile. 8) Copia informe pericial Planimétrico realizado por la Policía de Investigaciones de Chile. 9) Copia informe pericial Fotográfico realizado por la Policía de Investigaciones de Chile. 10) Copia informe pericial de Ecología y Medio Ambiente realizado por la Policía de Investigaciones de Chile.

II. TESTIMONIAL: En la audiencia de 11/10/2019 declaran los testigos BERNADO ANTONIO PALMA, GABRIEL ANDRES PALMA MORENO, MIGUEL ANGEL DIAZ UGALDE y LUIS ARTURO CARREÑO CARREÑO.

El primer testigo declara, AL PUNTO DE PRUEBA UNO. “El incendio se originó por la no mantención de los árboles que estaban debajo del tendido eléctrico, yo fui el primero que llegó ahí en ese momento y me di cuenta que los cables estaban rozando los árboles, eso produjo que se quemaran mucha plantación de eucaliptos, bosque nativo y pastizal”.

Repreguntado para que aclare el testigo en qué lugar se originó el incendio. “Responde. Eso está ubicado en la parcela el Culenar de la comuna de Litueche, correspondiente a asesorías e inversiones Castellano Ltda.

Repreguntado Para que diga cómo le consta que no hubo mantención de los árboles debajo del tendido eléctrico. Responde. “Porque yo era el cuidador de la parcela y pasaba por ahí todo el tiempo, hay un camino vecinal que está a diez metros donde fue el incendio y nunca vi que hubo mantención, había un árbol grande que rozaba, hacia corte con los cables.

AL PUNTO DE PRUEBA DOS, refiere: “Si fue incumpliendo de ellos me refiero a la empresa eléctrica, ellos nunca hicieron la mantención.

Agrega: “No hicieron mantención, nunca se preocuparon de podar esas matas que estaban debajo del tendido eléctrico, vuelvo a insistir yo pasaba



todos los días por ahí, nunca hablaron conmigo porque se supone que uno como cuidador deberían pedirle autorización para hacer ese plan de podar o a la empresa en este caso, pedir un permiso o la autorización que nunca se hizo, ellos nunca se preocuparon de nada.

AL PUNTO DE PRUEBA TRES, responde: “Si mucho perjuicio, vuelvo a ratificar muchas hectáreas de eucaliptus que estaban plantadas, bosque nativo pastizal. racias a dios se salvaron mis ovejas y caballos que tenía ahí, los caballos eran de mi hermano, que me había autorizado a tenerlos don Juan Carlos Mella.

El segundo testigo expresa AL PUNTO DE PRUEBA UNO. “Por la falla, falta de mantención en el tendido eléctrico de la parcela o fundo, no se cómo le llaman. Lo anterior me consta porque esa parcela era de mi padre y la conozco al revés y al derecho.

Repreguntado para que aclare, a que se refiere con falta de mantención en el tendido eléctrico. Responde. “Se supone que en la parcela había plantación de eucaliptos, y crecieron mucho y estaban tocando los cables eléctricos, la línea.

AL PUNTO DOS. Expresa: “Si tiene culpa de eso EMEL, que en esos años se llamaba así, por la falta de mantención del tendido eléctrico, como lo eucaliptos van creciendo y van tocando los cables.

AL PUNTO TRES. “Sí, no podría decir aproximado porque son varias hectáreas, se quemaron deslindes y pasto y monte.

Repreguntado para que diga el testigo si el propietario del inmueble afectado tuvo que incurrir en gastos a consecuencia del incendio. Responde. “Si. En arreglos de deslindes.

El tercer testigo AL PUNTO DE PRUEBA UNO. Fue por lo arboles eucaliptos, que estaban topando los cables eléctricos, cables del extendió eléctrico del sector donde se originó el incendio, fundo picaflor. Lo anterior me consta porque yo vi los cables como estaban al otro días del incendio, estaban cortados, justo donde había un gacho del eucaliptos, donde no se le hace mantención cerca de los cables.

Repreguntado para que diga el testigo si sabe de quién es el fundo picaflor o si se le conoce por otro nombre. Responde. “De don Juan Carlos, no se el apellido, no lo conozco lo he visto, no se otro nombre”.

Preguntado para que diga el testigo cómo estaban los cables del tendido eléctrico en el lugar donde se originó el incendio, antes, durante y después



del mismo. Responde. “Antes estaban guateados, sueltos y habían poste muy lejos uno del otro y por eso estaban guateados y durante estaban guateados y con el incendio se cortaron, al otro día estaban cortados. Después la empresa colocó otro poste al medio de los dos postes, para reparar y dejarlos como corresponde.

AL PUNTO DE PRUEBA DOS, dice: “Claro, porque fue falla de mantención del extendido eléctrico.

Repreguntado para que diga si alguna vez observó a la demandada haciendo mantención al tendido eléctrico, en la afirmativa si podaron o cortaron árboles o vegetación que rozaba o tocaba cables eléctricos. Responde. “NO, NUNCA vi hacer mantención.”.

AL PUNTO DE PRUEBA TRES. Responde: “Si sufrió perjuicios, se quemaron árboles, pastizales, deslindes. Esto lo sé porque yo lo vi, y paso siempre por el sector.

El último de los testigos depone al PUNTO DE PRUEBA UNO. El incendio fue provocado por el extendido eléctrico, me consta porque yo fui a ayudar a apagar el fuego y vi cuando estaban los bomberos apagando el incendio y yo fui a ayudar a apagar. Por los cables porque estaban muy lejos los postes de otro y habían muchos árboles”.

Repreguntado para que diga a que se refiere con que los postes estaban muy lejos de otros. Responde. “La distancia es que deben haber estado a unos cien metros, lo que no corresponde a esa distancia, porque el campo no es suficientemente plano para ese tipo de extendido eléctrico.

AL PUNTO DE PRUEBA DOS “Sí. Porque no ha hecho la mantención me refiero a los árboles que estaban topando los cables.

Repreguntado para que diga el testigo como le consta la falta de mantención a los árboles que topaban los cables. Responde. “Porque siempre paso por ahí.

AL PUNTO TRES. “Sí, porque se quemaron los árboles, el bosque. Repreguntado para que aclare el testigo de qué tipo de árboles se componía el bosque. Responde. De eucaliptos.

OCTAVO: Que la demandada a su turno adjunto al proceso los siguientes elementos probatorios.

- **Documental:** Con fecha 17/10/2019, adjuntó los siguientes instrumentos: 1. Ficha “¡Protejamos nuestros bosques y nuestras viviendas! ALTO a los incendios forestales”, elaborado por CONAF,



Carabineros de Chile, PDI y CORMA. **2.** Documento denominado “Campaña de Prevención Informativo general, Alto a los incendios forestales.”, elaborado por CONAF. **3.** Documento denominado “Campaña de Prevención Informativo predios agrícolas y forestales. Alto a los incendios forestales.” Elaborado por CONAF. **4.** Manual con medidas para la Prevención de Incendios Forestales, Región de O’Higgins, correspondiente al documento de trabajo 569, elaborado por CONAF. **5.** Manual Medidas Prediales de Protección de Incendios Forestales, correspondiente al Documento de Trabajo 451, elaborado por CONAF. **6.** Protocolo de Plantaciones Forestales. Política Forestal 2015-2035, elaborado por CONAF y el Consejo de Política Forestal. **7.** Sentencia dictada en causa Rol N°7844-2016 por el Juzgado de Policía Local de La Serena, de fecha 17 de enero de 2017. **8.** Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, en causa N° de ingreso 70-2017, de fecha 25 de agosto de 2017. **9.** Copia impresión noticia titulada “Monocultivo: El polvorín extendido a lo largo de Chile que crea un escenario propicio para Mega Incendios Forestales”, Radio Villa Francia, 23 de enero de 2017. **10.** Copia impresión noticia titulada “Recomiendan eliminar eucaliptus en cerros de Valparaíso”, Republica de Chile Senado, 27 de junio de 2016. **11.** Copia impresión noticia titulada “Incendios forestales: ¿cómo influyen los monocultivos de pino y eucalipto en la propagación del fuego?”, El Ciudadano, 1 de febrero de 2017. **12.** Copia impresión noticia titulada “El debate de los expertos en bosques: Exóticos vs. nativos”, La Tercera, 3 de febrero de 2017. **13.** Copia impresión noticia titulada “Incendios forestales y crisis hídrica centro sur Chile: ¡No más plantaciones de pinos y eucaliptus!”, El Resumen, 19 de febrero de 2015. **14.** Copia impresión noticia titulada “Las lecciones que nos dejan los incendios en Chile”, WWF, 10 de febrero 2017. **15.** Copia impresión noticia titulada “¿Los monocultivos facilitan la ocurrencia de incendios forestales?”, Fundación Casa de la Paz Educación y Acuerdo para la Sostenibilidad. **16.** Copia artículo “Efectos de plantaciones de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* sobre el recurso agua en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío, Chile”, de la revista Bosque (Valdivia), n° 31, p. 219-230, año 2010, escrito por Antón Huber, Andrés Iroumé, Christian Mohr y Cristian Frene. **17.** Copia “Estudio del Comportamiento del Fuego Mediante Simulación de Incendios Forestales en Chile”, de la revista Geographicalia (2010), p. 81 – 103, escrito por



Miguel Castillo Soto y Roberto Garfias Salinas. **18.** Copia “Efectos ecológicos de los eucaliptos”, Estudios FAO Montes 59, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma 1987, escrito por M. E. D Poore y C. Fries. **19.** Copia “Guía Básica de buenas prácticas para plantaciones forestales de pequeños y medianos propietarios”, Corporación Nacional Forestal CONAF, Ministerio de Agricultura, 2013.

Con fecha 17/10/2019: **1.** Carta de fecha 11 de mayo de 2012, en virtud de la cual don Humberto Cerda Parra, administrador de EMELECTRIC, responde las inquietudes planteados por la Policía de Investigaciones en relación al incendio que afectó el sector de Culenar. **2.** Autorización Sr. Francisco Palma para construcción de línea eléctrica. **3.** Oficio SECPLAC VI Región N° 338, informando de las autorizaciones para proyectos de electrificación social, entre los cuales se encuentra el proyecto Cartagena El Culenar. **4.** Extracto de plano de construcción del proyecto Cartagena El Culenar, donde se indica el trazado del proyecto que cruza la propiedad del Sr. Palma (879 metros), y que recibió el V°B° del municipio de Litueche. **5.** Copia de registro de inspecciones periódicas y mayores, de fecha 16/06/2010 y 17/10/2011. **6.** Copia de registro de los trabajos de roce y poda realizados en el sector de fechas 17, 18 y 20 de mayo del año 2011. **7.** Orden de operación y de planificación de faenas de roce y poda realizados en el sector de fechas 17, 18 y 20 de mayo del año 2011. **8.** Correo electrónico de fecha 11 de enero de 2019, enviado por el Portal de Transparencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. **9.** Archivo denominado “Acuse_Recibo.pdf”, en el cual se deja constancia de la recepción de la solicitud formulada por el portal de transparencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con fecha 12 de diciembre de 2018, adjunto en el correo electrónico anterior. **10.** Archivo denominado “AU004T0012194.pdf”, adjunto en el correo electrónico singularizado con el numeral primero, en el cual se da respuesta a la solicitud formulada al portal de transparencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. **11.** Archivo denominado “DS_4188_Reglamento_Corrientes_Fuertes_v.12nov55.pdf”, adjunto en el correo electrónico singularizado en el numeral primero, el cual corresponde a una copia del Decreto 4188 de 12 de noviembre de 1955 del Ministerio del Interior, el cual aprueba el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de



Corrientes Fuertes. y **12.** Archivo denominado “DS_4839_Modifica_Reglamento_corrientes_fuertes_v.3nov55.pdf”, adjunto en el correo electrónico singularizado en el numeral primero, y que corresponde a la copia de la publicación en el Diario Oficial de 24 de noviembre de 1955 de la Rectificación del Decreto N°4188 de 22 de septiembre del año en curso (1955).

RESPECTO DE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN:

NOVENO: Que la demandada opuso a la demanda la excepción de prescripción, la que fundamenta en que la demandante sustenta la acción deducida **en la responsabilidad de su representado por falta de servicio**, señalando expresamente el petitorio de la demanda en que se señala “**POR TANTO**, en mérito de lo expuesto y dispuesto en los artículos 2314, 2329 del Código Civil, demás normas legales citadas, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás pertinente”.

Agrega que encontrándose dentro de la esfera **de la responsabilidad extracontractual**, tratándose de una acción indemnizatoria que ha de considerarse prescriptible, cabe aplicar el plazo extintivo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, señalando que la jurisprudencia de los tribunales es uniforme en cuanto a considerar que la acción indemnizatoria prescribe de acuerdo al plazo indicado en el artículo 2332 del Código Civil, utilizando como principal argumento el artículo 2497 del mismo texto legal que preceptúa que las reglas sobre prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado.

De la simple lectura del libelo de demanda, documentos acompañados y de conformidad con lo dispuesto en la norma precedentemente señalada, se colige que la perpetración del acto denunciado, (incendio), ocurrió el día 29 de Enero de 2012 y la demanda de autos se notificó el 4 de Diciembre de 2017, esto es más de cinco años después del siniestro, por lo que la acción se encuentra inexorablemente prescrita.

DECIMO: Que de acuerdo a lo indicado en el libelo de demanda, aparece de manifiesto que la pretensión de la demandante descansa en el estatuto regulado en Libro IV, Título XXXV sobre responsabilidad extracontractual delictual o cuasidelictual.



UNDECIMO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2332 de nuestro Código Civil, la acciones derivadas del delito o cuasidelito civil, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto.

DUODECIMO: Que si bien el ordenamiento jurídico protege al acreedor, facultándolo para exigir mediante acciones legales el ejercicio pacífico de su derecho; al mismo tiempo, por razones de certeza jurídica, otorga protección al sujeto pasivo de la relación, estableciendo un límite temporal a la obligación que nace de esta relación. De esta manera, la prescripción extintiva, establecida mediante normas de orden público, constituye un castigo para el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley, al mismo tiempo que otorga certeza al deudor de la obligación y, a la sociedad toda, en cuanto a la extensión temporal de esta obligación.

Se trata así de una institución de orden público, de suma relevancia, puesto que otorga seguridad jurídica a las relaciones en la sociedad, asentando las situaciones jurídicas tras haber transcurrido un cierto lapso de tiempo, en la medida que el sujeto activo no haya ejercido las acciones que el mismo ordenamiento le entrega. Este tipo de prescripción, se encuentra regulada en el artículo 2514 del Código Civil, para cuya aplicación basta entonces, que no se hayan ejercido las acciones dentro de cierto lapso de tiempo, produciéndose así el efecto extintivo de las acciones y derechos ajenos.

En relación con el plazo que se exige para provocar este efecto extintivo, en el caso de autos, se encuentra regulado por el artículo 2332 del Código Civil, el que indica que éste será de cuatro años contados desde la perpetración del acto.

DECIMO TERCERO: Que, además, la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. Al efecto, nuestro Código Civil en el artículo 2497 preceptúa que **“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”**.

DECIMO CUARTO: Que, consecuentemente, en la especie resulta plenamente aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad



extracontractual prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.

DECIMO QUINTO: Que, la actora estima como pertinente para comenzar a contabilizar el plazo de prescripción, el 8 de Mayo del 2012, **fecha en que tomó conocimiento que la demandada era la responsable del incendio.** Sin embargo, este sentenciador comparte la tesis del destacado autor don José Pablo Vergara Bezanilla, que en su apunte de **“MOMENTO INICIAL DEL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL”**, señala que:

“ Ha sido objeto de controversia el tema relativo a determinar desde qué momento empieza a correr el plazo de cuatro años establecido en el art. 2332 del Código Civil para la prescripción extintiva de la responsabilidad extracontractual.

Dicho precepto dispone: **“Las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”.**

Existe acuerdo en que cuando el daño se produce coetáneamente con el hecho antijurídico doloso o culpable que lo causa, la prescripción corre a contar de la perpetración o consumación de ese hecho.

La duda se ha planteado en los casos en que el daño no se presenta de inmediato, por no haberse manifestado aun al momento de perpetrarse el acto ilícito.

Agrega el citado autor que **“Una tendencia doctrinal postula que en tales casos no basta con la perpetración del hecho ilícito imputable a culpa o dolo para que empiece a correr la prescripción; es necesario esperar que el daño se produzca, porque siendo éste un elemento fundamental de la responsabilidad civil, antes de que él ocurra no puede nacer la acción destinada a obtener su resarcimiento.** Se afirma que el acto se perpetra desde que se produce el daño consecuencial a su realización, porque no es posible sostener que se pueda cometer un hecho ilícito sin que lleve aparejado un daño.

Continúa señalando que, **sin embargo, como afirma Somarriva, traiciona la letra de la ley. Lleva, además, al resultado inevitable, contrario a esa lógica, de transformar, de hecho, en imprescriptible a la acción indemnizatoria. Por otra parte, prescinde del elemento histórico de interpretación y del carácter singular y excepcional que reviste el art. 2332 en relación con la regla general sobre el cómputo de la prescripción extintiva**



y, por último, está asentada en la errónea o inexacta premisa de que solo el daño actual o presente da lugar a resarcimiento”.

Luego de formular observaciones a las posturas doctrinarias, añade el autor **“En este sentido nos parece incorrecto sostener que es necesario que el daño se concrete para que empiece a correr la prescripción. Ello lleva a eliminar de plano el resarcimiento del daño futuro, puesto que si hubiera que esperar que éste se manifestara en su integridad, querría decir que el perjuicio futuro no sería indemnizable mientras no adquiriera el carácter de daño presente o actual. Solo éste, pues, daría lugar al resarcimiento, y quedaría así excluido el daño futuro como fuente de la responsabilidad extracontractual, lo que no es jurídicamente sostenible.**

Aun más, la tesis de que la prescripción comienza a correr desde la efectiva producción del daño, porque solo en ese momento se reúnen los requisitos de la responsabilidad extracontractual, permitiría sostener que la mera eventualidad de que el hecho ilícito pueda causar un daño, por muy problemática o conjetural que sea su ocurrencia, impediría alegar la prescripción mientras tal daño no se produjera en la realidad. Y si no llegara a concretarse, la prescripción jamás empezaría a correr. De esta manera, el art. 2332 quedaría prácticamente derogado.

Concluye que, **conforme a la norma interpretativa del art. 19 del Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Ahora bien, el tenor literal del art. 2332 permite inferir claramente su sentido al disponer que el plazo de prescripción de cuatro años se cuenta desde la perpetración del acto.**

De acuerdo con el léxico, “perpetrar” es “cometer, consumir un delito o culpa grave”; “delito” es “culpa, crimen, quebrantamiento de la ley”; “culpa”, en cuanto implica responsabilidad, es “causa involuntaria de un suceso o acción imputable a una persona” y “cometer”, “dicho de culpas, yerros, faltas, etc.”, es “caer, incurrir en ellas”. Como se ve, para el léxico la perpetración está referida exclusivamente al acto o suceso infractor de la ley e imputable a una determinada persona, y se entiende cometido desde que dicha persona cae o incurre en él, sin importar sus resultados o consecuencias. Sostener, pues, que donde la ley dice “perpetración del acto” deba leerse “perpetración del daño”, importa dar a la ley un sentido que claramente traiciona su tenor literal.

Por otra parte, técnicamente la responsabilidad civil está dotada de una estructura compleja, compuesta por el acto ilícito o antijurídico, por su



imputabilidad a culpa o dolo, por el daño y por el nexo de causalidad entre aquél y éste. Los dos primeros elementos se encuentran diseñados en el artículo 2284 del Código Civil. Este precepto, al referirse a las fuentes de las obligaciones que se contraen sin convención, menciona entre ellas al delito y al cuasidelito y los define diciendo que si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar (dolo), constituye un delito, y que si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito.

Como se advierte, la norma describe dos de los elementos de la responsabilidad civil, la ilicitud o antijuridicidad del hecho y su imputabilidad por culpa o dolo. Estos elementos tienen fisonomía propia y son perfectamente diferenciables del resultado dañoso; y, además, constituyen su antecedente causal. No cabe, pues, confundirlos y decir que el acto ilícito o conducta transgresora del ordenamiento jurídico e imputable a una persona determinada no se entiende perpetrado si no hay daño. Este último es un elemento ulterior necesario para que surja la obligación de indemnizar; pero para ello se requiere que aquel acto se haya cometido. Así lo exige el artículo 2314: “El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”. Claramente esta norma presupone que el hecho o acto ilícito doloso o culpable, o sea el delito o cuasidelito, esté cometido, y para responsabilizar a su autor agrega el requisito de que ese acto infiera daño a otro. Dicho lo mismo de otra manera, el acto perpetrado no obliga a indemnizar sin la concurrencia de los elementos que faltan para completar la responsabilidad civil, esto es, el daño y la relación de causalidad entre éste y el acto. Pero ello no significa que para que el acto se entienda cometido o perpetrado sea necesario esperar la efectiva producción del daño.

En conclusión, el sentido de la ley es claro: el art. 2332 atiende a la fase de la acción para el cómputo del plazo de cuatro años de la prescripción extintiva, de manera que **el cuadrienio se cuenta desde la comisión del acto antijurídico doloso o culpable** y no desde que el daño se produzca. **La historia fidedigna de establecimiento del art. 2332 confirma plenamente lo expresado. En el proyecto de 1853 así como en el llamado proyecto inédito de 1855, se disponía que “las acciones por daño o dolo prescriben en dos años contados desde el día en que la persona a quien competen tuvo conocimiento del daño o dolo; pero en todo caso podrá oponerse a ellas una prescripción de cinco años”.** Como se ve, los proyectos establecían una



prescripción de dos años para intentar la acción, contado desde que el daño fuera conocido, y fijaba un plazo máximo de cinco años que debía correr en todo caso, independientemente de que se conociera o no el daño. En el texto final del código aprobado se eliminó esta norma. En lugar de ella, se optó por fijar un plazo único de cuatro años, contado desde la perpetración o consumación del acto ilícito, sin hacer distinción alguna con respecto al conocimiento del daño. Esta fórmula transaccional puso término a cualquier posible controversia, estatuyendo con claridad un único plazo de cuatro años, con lo que, al mismo tiempo, se dio plena certeza al momento inicial que debe considerarse para el cómputo de la prescripción.

DECIMO SEXTO: Que habiendo ocurrido el incendio el 29 de enero de 2012 y notificada la demanda el 4 de Diciembre de 2017, la acción por responsabilidad extracontractual se encuentra prescrita.

DECIMO SEPTIMO: Que respecto a lo reflexionado precedentemente, cabe analizar ahora, si la interposición de la demanda civil que efectuó el demandante ante el Tribunal de Litueche con fecha 10 de Julio de 2013, en que la demandada opuso la excepción de incompetencia del Tribunal que fuera acogida con fecha 12 de Enero del 2015, tuvo la virtud de interrumpir el plazo de prescripción que corría en contra del demandante.

DECIMO OCTAVO: Que, según la doctrina nacional, las razones por las que la legislación ha consagrado la institución de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, son las siguientes: propender a la estabilidad de las situaciones existentes, conducente al orden y tranquilidad sociales, erigiéndose como un obstáculo a dicha finalidad que los derechos de las partes se mantengan en la incertidumbre; afianzar definitivamente una situación de hecho que se ha manifestado pública y pacíficamente, por un largo espacio de tiempo, con el sello de la legalidad; evitar litigios acerca de hechos o situaciones que escapan a toda prueba o comprobación, pues, de lo contrario, los deudores tendrían que conservar las pruebas de la extinción de las obligaciones asumidas durante un largo tiempo, que puede tornarse indefinido; la presunción de pago o de satisfacción de la respectiva obligación que se genera a partir de la conducta asumida por el acreedor y que consiste, precisamente, en no ejercer la acción judicial respectiva ante los tribunales para obtener su satisfacción forzada; la presunción de abandono del derecho a la prestación debida de parte del acreedor; sancionar al acreedor por su negligencia en el ejercicio de los derechos consagrados en las leyes, por no iniciar a tiempo las acciones judiciales tendientes



a su reconocimiento, esto es, por su inactividad prolongada y culpable. (Fueyo Laneri, Fernando, "Derecho Civil. De las obligaciones", Tomo cuarto, Volumen II, Imprenta y Litografía Universo, Santiago, Chile, 1958, p.234-236, y Domínguez Benavente, Ramón, "Algunas consideraciones sobre la prescripción" En: Revista de Derecho Universidad de Concepción 15 (59): ene-mar 1947, p.721-723). Así que se trata de una institución de orden público, precisamente por proveer a fines de conveniencia pública y de tranquilidad social y de garantía de las haciendas de las personas, de completa necesidad, y la doctrina extranjera sostiene "que no tiene otro fundamento que ciertas consideraciones de utilidad. He aquí cuales son; la certidumbre en la consistencia de los derechos es una de las condiciones esenciales de la libertad civil, la cual consiste en la seguridad. Interesa que la confianza se asegure; el orden social está en ello interesado, pues no debe sufrir ni por la negligencia ni por la imprudencia que tal o cual persona pueda cometer". (Beudant citado en Contreras Aburto, Luis, "De la prescripción extintiva civil", memoria de prueba para optar al grado de licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Escuela Tipográfica Salesiana, Concepción, 1945, p. 39 y 40); siendo dicha clase de normas -las de orden de público-, aquéllas en que para los supuestos que contemplan, imponen necesariamente su propia regulación, sin permitir a los particulares prescindir de ésta y establecer otra distinta, pues existe un interés social en que la regulación de los casos que trata sea una sola para todos los individuos. (Alessandri R., Arturo "et al", "Tratado de Derecho Civil. Partes Preliminar y General", Tomo I, Editorial Jurídica, 7° edición, Santiago, Chile, 2005, p.46);

DECIMO NOVENO: Que, entonces, constituye un obstáculo para que se configure la institución de la prescripción como medio de extinguir las acciones y derechos ajenos, determinadas conductas que puede asumir tanto el acreedor como el deudor, pues, si el primero ejerce las acciones judiciales pertinentes o el segundo reconoce la obligación, expresa o tácitamente, el curso del término legal se interrumpe, civil o naturalmente, según sea el caso, todo conforme lo dispone el artículo 2518 del Código Civil. También impide que se genere el efecto que provoca la institución de que se trata - liberrar al obligado del compromiso que asumió por la actitud negligente del acreedor en el ejercicio de sus derechos-, si el deudor, una vez cumplido el plazo legal de inactividad en que incurrió el acreedor, renuncia en el juicio respectivo a alegar la prescripción, lo que puede hacer de manera expresa o tácita, atendido los términos establecidos en el artículo 12 del Código Civil, como si decide simplemente cumplir una obligación que carece de



acción para exigir su cumplimiento, que se denomina meramente natural, esto es, de aquellas de que contempla el artículo 1470 número 2 del mismo código;

VIGESIMO: Que la interrupción civil del curso del término legal necesario para declarar la prescripción extintiva, según lo señala el artículo 2518 del Código Civil, se produce por la demanda judicial, salvo que concurren los casos enumerados en el artículo 2503 del mismo cuerpo legal, que son los siguientes: **1° si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;** 2° si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia; y 3° si el demandado obtuvo sentencia de absolución.

A juicio de este sentenciador, la interpretación correcta de dichas normas es aquella que postula que **es la notificación judicial de la demanda efectuada en forma legal la que provoca el efecto de impedir que se complete el plazo de que se trata.**

VIGESIMO PRIMERO: Que, a juicio de este sentenciador, son nulos de pleno derecho los actos procesales **cuando se produzcan por o ante el tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional**, y si son nulos de pleno derecho, por ende son ineficaces, y no pueden tener valor interruptivo del término previsto para la prescripción.

Como es sabido, la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva. Esta construcción finalista de la prescripción tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades como en consideración de necesidad y utilidad social.

Sin perjuicio de lo anterior, de la misma demanda aparece que la demandada dio cuenta de la incompetencia del Tribunal de Litueche al demandante **con fecha 04 de Noviembre de 2013**, alegación que resultaba patente y manifiesta, desde que el domicilio de la sociedad es en la ciudad de Santiago, y se encuentra señalado en los estatutos sociales que constan en instrumentos públicos registrados en organismos de la misma naturaleza y siendo sencilla su revisión, por lo que mantenerse en la jurisdicción de Litueche a juicio de este sentenciador, fue una conducta descuidada del actor.

VIGESIMO SEGUNDO: Que atendido la conclusión precedente el tribunal no emitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por ser incompatible con decidido;



Y, visto, además lo dispuesto en los artículos 1437, 1698 y 2314 y siguientes y 2492 y siguientes del Código Civil, 140, 160, 169, 170, 254 y siguientes, 341 y siguientes 356 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

- a) Que se rechaza la tachada deducida en la audiencia de 11 DE Octubre de 2019 al testigo BERNARDO ANTONIO PALMA MORENO.
- b) Que se acoge la excepción de prescripción formulada en la contestación de la demanda de fecha 15 de Junio de 2018.
- c) Que no se emite pronunciamiento sobre el fondo del asunto, de acuerdo a lo asentado en el fundamento vigésimo segundo.
- d) Que no se condena en costas a la demandante por estimar que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y archívese.

DICTADA POR DON JORGE L. MENA SOTO, JUEZ TITULAR. AUTORIZA DON MARIO LUIS ROJAS GALLEGUILLLOS, SECRETARIO SUBROGANTE.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticinco de Febrero de dos mil veinte**

